



FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

Responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el
proceso inmediato en el distrito Judicial de Lima Norte 2016.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA:

Maissie Marlene Vasquez Cespedes

ASESOR:

Mgr. Jaime Elider Chávez Sánchez

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal

LIMA - PERÚ

2017

Rodríguez Figueroa José Jorge

Presidente

Wenzel Miranda Eliseo Segundo

Secretario

Chávez Sánchez Jaime Elider

Vocal

Dedicatoria

Esta tesis va dedicada a mi mamá y a mi papá por su apoyo incondicional en todo momento de mi vida. A mis 3 ángeles que desde el cielo guiarme y darme las fuerzas necesarias para alcanzar mis metas.

Agradecimiento

A mis padres por todo el esfuerzo que siempre hacen para poder darme lo mejor, sus conocimientos y consejos, por todos los valores inculcados para ser buena persona y profesional, porque sin ellos no habría logrado todo lo que me he propuesto, infinitas gracias a ellos siempre.

Declaración jurada de autenticidad

Yo, Maissie Marlene Vasquez Cespedes, con DNI N° 72932079, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Derecho, Escuela Profesional de Derecho, declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiado; es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales; no han asidos falseados, duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificarse fraude plagio, auto plagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y las consecuencias que de mi accionar deviene, sometién dome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, julio de 2017

Maissie Vásquez Cespedes

DNI N° 72932079

Presentación

Señores miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, de la Facultad de Derecho:

Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de la escuela de Pregrado de la Universidad “Cesar Vallejo” presento el trabajo de investigación denominado: Responsabilidad restringida en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito Judicial de Lima Norte 2016, con la finalidad de obtener el Título Profesional de Abogada, lo cual es una muestra del esfuerzo y dedicación que tuve durante mi etapa académica en la universidad hasta la culminación exitosa de la misma, que estoy segura será un aporte necesario e importante en el ámbito jurídico.

En el presente trabajo se explica la importancia de la aplicación del artículo 22 del código penal del Perú en el proceso inmediato, y el hecho de proteger sus derechos, sin perjuicio a ello, este debe responder ante la justicia y no ser juzgado solo bajo un criterio basado en factores referenciales, debido a que la coyuntura en la que vivimos ya no podemos permitirlo; esta investigación adquiere importancia porque en nuestra norma existen varios vacíos legales.

El estudio está compuesto por VI capítulos, Capítulo I, describe el Problema de Investigación, justificaciones, antecedentes y objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, asimismo se establece el marco teórico, Capítulo II, presenta los componentes metodológicos, Capítulo III, señala los resultados de la investigación, Capítulo IV, señalas la discusión, Capítulo V menciona las conclusiones, Capítulo VI señala la recomendación seguido de las referencias bibliográficas y anexos.

Señores miembros del jurado, esta investigación cumple con los estándares requeridos de acuerdo al reglamento correspondiente para la presentación de Tesis para obtener el título profesional de abogado.

La autora

Índice

Página de Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración jurada de autenticidad	v
Presentación	vi
RESUMEN	ix
ABSTRACT	x
I. INTRODUCCIÓN	11
Aproximación Temática	13
Trabajos Previos	16
Teorías Relacionadas al Tema	25
Formulación del problema	42
Justificación del estudio	43
Objetivos	46
Supuestos jurídicos	47
II. MÉTODO	49
2.1. Tipo de investigación	50
2.2 Diseño de Investigación	50
2.3 Caracterización de sujetos	51
2.4 Población y muestra	52
2.5 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad	53
2.6 Método de análisis de Datos	54
2.7 Aspectos éticos	54
III. RESULTADOS	55
3.1. Análisis e interpretación de resultados	56
3.2. Descripción de resultados de la Técnica análisis jurisprudencial	61
IV. DISCUSIÓN	65
V. CONCLUSIONES	76
VI. RECOMENDACIONES	78
VII. REFERENCIAS	80

VIII. ANEXOS	85
Anexo 01: Matriz de consistencia	86
Anexo 02: Validación de Entrevista – Chávez Sánchez Jaime Elider	88
Anexo 03: Validación de Entrevista – Santisteban Llontop Pedro Pablo	89
Anexo 04: Validación de Entrevista – Castro Rodríguez Leslie	90
Anexo 05: Validación de Jurisprudencia – Castro Rodríguez Leslie	91
Anexo 06: Validación de Jurisprudencia – Chávez Sánchez Jaime Elider	92
Anexo 07: Validación de Jurisprudencia –Roque Gutiérrez Nilda Yolanda	93
Anexo 08: Instrumento – Entrevista	94
Anexo 09: Instrumento – Jurisprudencia	98
Anexo 10: Entrevista a Marco Antonio Baltuano Vasquez	114
Anexo 11: Entrevista a Oscar Crisóstomo Salvatierra	118
Anexo 12: Entrevista a María Rosa Tapia Castañeda	122
Anexo 13: Entrevista a Sherly Elizabeth Pinaud Herrera	126
Anexo 14: Entrevista a Yda Pacheco Portal	130

RESUMEN

El presente trabajo, realiza un estudio importante del problema que existe en la aplicación de la responsabilidad restringida por edad, teniendo así como objetivo general el identificar como afecta la aplicación de la Responsabilidad Restringida por edad en la determinación de la pena, en el distrito judicial de Lima Norte, para efectos en el proceso inmediato ya que este mecanismo cuenta con sus propios beneficios y adicionar a estos el artículo 22 del código penal del Perú bajo un sustento que a la hora de otorgarle no han sido debidamente sustentado y su premisa contrapone lo establecido en la Constitución Política del Perú, en donde se considera Adulto capaz a una edad determinada; todo lo analizado y expuesto en la presente investigación, bajo un sustento teórico y luego de los resultados que fueron recogidos a través de entrevistas tales como a magistrados, fiscales y personas especializados en la materia; a razón ello, los resultados fueron procesado. En ese sentido se concluyó que efectivamente la aplicación de la responsabilidad restringida por edad, debe ser sustentada caso contrario no se debería aplicar.

Palabras Clave: Responsabilidad Penal, Determinación de la pena, Proceso Inmediato, Responsabilidad Restringida.

ABSTRACT

The present work, makes an important study of the problem that exists in the application of age-restricted liability, having as a general objective to identify how it affects the application of the Restrictive Age Responsibility in the determination of the penalty, in the judicial district of Lima Norte, for effects in the immediate process since this mechanism counts on its own benefits and to add to these the article 22 of the penal code of Peru under a sustenance that at the time of granting it have not been properly supported and its premise contrasts what established in the Political Constitution of Peru, where it is considered a capable adult at a certain age; everything analyzed and exposed in the present investigation, under a theoretical sustenance and after the results that were collected through interviews such as magistrates, prosecutors and people specialized in the matter; to reason it, the results were processed. In this sense, it was concluded that, in fact, the application of age-restricted liability must be supported; otherwise it should not be applied.

Key Words: Criminal Responsibility, Determination of the penalty, Immediate Process, Restricted Responsibility

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación, ha sido realizada con el propósito de exponer una problemática que tiene un impacto bastante significativo que a su vez genera un daño contundente, frente al quizás, resulte el problema más complejo, ya que este es cotidiano en nuestra sociedad. Es de conocimiento público de la inseguridad en la que nuestra sociedad está sumergida, puesto quién menos fue o conoce quién haya sido víctima de la inseguridad ciudadana y a diario nuestros medios de comunicación están repletos de artículos, reportajes e imágenes que son la clara muestra de ello, además de poner en evidencia en la crisis que estamos pasando respecto a nuestro sistema de justicia por la manera como responde a esta problemática. Teniendo en cuenta que todos estamos expuestos a que presenciemos o seamos víctima de un hecho delictivo.

Antes, se solía creer que si no salías por la noche no pasaba o te sentías seguro, sin embargo, al igual se creía que por ser adulto mayor o encontrarte en gestación o con un menor en brazos no te pasaría nada, pues todo eso quedo en el pasado debido a que con el tiempo todo se ha venido agravando la situación. Entonces, ya que este mal llamado delincuencia sucede de manera indiscriminada, crea mucho desconcierto ya que cada día vivimos con un grado alto de inseguridad y no presenciamos ninguna mejoría, por lo contrario somos testigos de que se agrava cada vez más.

Por esta razón, me veo con la responsabilidad de analizar y poner este tema en la palestra para que este artículo que se encuentra en vigencia, el cual se viene aplicando de manera indiscriminada ya que se viene dando sin contar con un medio probatorio, poco a poco iré desarrollando puntos que se deberían tomar en cuenta, como ya antes lo mencione la principal afectada es la sociedad. Su aplicación está causando un perjuicio, exponiendo la integridad y la vida de todos con la idea de un supuesto, el cual no tiene mayor sustento y no aplica a la realidad actual, a continuación sustentaré porque se debe modificar o derogar dicho artículo por el impacto que genera y lo que afecta a nuestro día a día.

Aproximación Temática

Cabe señalar además que no es para nadie, novedad que en nuestro ordenamiento se está tomando medidas para confrontar que los menores de edad se estarían aprovechando de su condición como tal para cometer hechos delictivos a sabiendas que no serían sancionados como los adultos, debido que para ellos se tiene un trato especial, por los tratados internacionales que se tienen para su protección.

Situación que ya ha sido de análisis y hasta han habido proyectos de que ya no se debería de darles un trato diferenciado, proponiendo que se reduzca la edad de 16 años para que asuman la responsabilidad y ya no sean considerados como menores. Por lo que ya ha habido modificaciones en algunos delitos, no determinando que se reduzca la edad pero si se han tomado otra posiciones. Teniendo conocimiento que hoy por hoy, ya no se puede tomar a un menor de edad como tiempo atrás si se hacía, debido a muchos factores, el principal es que todo evoluciona por tanto la sociedad también y las normas se deben acoplar a esa realidad.

Procesos como el Inmediato si bien es cierto cumple su rol de agilizar los casos de flagrancia y resolver todo en un tiempo bastante prudente, en este existe un beneficio al que se acoge el imputado, la denominada terminación anticipada, que por su colaboración y reconocer su error este puede gozar de dicho beneficio, y estamos hablando de un 1/6 de su pena, sin embargo se puede tomar como esa medida como excesiva si es que se le atribuye también la Responsabilidad Restringida por Edad, pero lo que causa desconcierto es que su aplicación se da bajo un sustento bajo un supuesto en la edad cronológica, es decir si a la hora de cometer el delito tiene la edad de 18 a 21 años o mayor de 65 años, ya es mérito suficiente para concedérsela.

Por esa relevancia se debe observar cada extremo de ese artículo. Además de esclarecer unos conceptos básicos que por algunas razones pierden peso frente a distintas situaciones. También podremos ver como diferentes legislaciones internacionales se pronuncian, si son parecidas o no respecto al tema controversial

para así ver las distintas posiciones. Teniendo en cuenta que a veces podemos tener normas parecidas pero el conflicto se encuentra en la aplicación de estas.

La sociedad actualmente afronta una de sus mayores luchas para combatir la inseguridad ciudadana, no solo luchando en las calles y con ello me refiero a tomar las medidas que sean necesarias para ponerse en buen recaudo sino que además la posible más grande lucha la encontremos en los juzgados, con lo cual es un gran paso porque para llegar a los juzgados es otra lucha. Ahora, si bien es cierto el populismo siempre señala que se sean drásticos con los imputados, señalando que se aplique la pena de muerte o que se tomen sanciones parecidas, las cuales no están permitidas en nuestro ordenamiento.

Frente a esta realidad de hechos tan lamentables; cuesta reconocer que las calles son tierra de nadie, y cada vez nos cuestionamos más, que están haciendo nuestras autoridades para confrontar la ola de delincuencia que no hace más que incrementar. ¿Cuánto más debemos pasar?, ya que la seguridad ciudadana es un caos, y para nadie es una novedad que es un mal que viene de tiempo atrás, que la única diferencia es que a medida que avanza es mucho peor.

Debido a ello me veo en la necesidad de escoger este tema, y plantear una posición que busca contribuir, para mejorar el bienestar de la sociedad en conjunto preservando la seguridad ciudadana, por lo cual mi presente investigación está dirigida a la aplicación del Artículo 22 del código penal del Perú, siendo está motivada con un supuesto que no aplicaría para todos ni siquiera sé sabe con certeza que aplique a específicos ya que no cuenta con un medio probatorio y que se aplique de manera tan ligera de manera tan abierta a todos los casos, no sería una manera adecuada, considero que se pueden tomar otras medidas y esta demás decir que, que el sujeto activo se encuentra debidamente protegido con sus derechos y el Perú lleva un sistema garantista, sin contar que además cuenta con beneficios ya establecidos, mi objetivo no es ser radicales pero si ser justos y proporcionales a la

hora de brindar beneficios, si ya se protege sus derechos y se les da beneficios considero excesivo atribuirle uno más, peor aún con uno que no tiene sustento firme y se aplica con solo contar con una edad cronológica.

Podemos preguntarnos ¿Cómo se sustenta la vigencia de este artículo en la actualidad?, porque sinceramente, no considero que se cree un perjuicio o se afecte algún derecho del sujeto activo si dicho artículo se derogara. Existe una línea delgada entre garantizar y proteger los derechos de los agentes activos y de esa manera desamparar a toda una sociedad porque se estaría contraviniendo y poniendo en riesgo el derecho y la seguridad de toda una sociedad en plenitud, si la decisión que se toma es bajo un supuesto que no está debidamente sustentado.

Y más aún si su aplicación es de manera indiscriminada, de manera tan general y automática, que no es suficiente los beneficios que ya tienen, realmente preocupa, entiendo que el sistema también busca rehabilitar y reintegrar a estas personas, pero tampoco debemos ser tan benevolentes, se deben también tener en cuenta la coyuntura en la que nos encontramos frente a la inseguridad ciudadana y ver sentencias que no impuestas bajo un sustento firme, por lo contrario un sustento que se cumpliría en casos aislados y aplicarlos de manera general sin tomar conciencia de la repercusión que esta tiene frente a la sociedad.

Si tanto preocupa ese punto de la madurez pues podría pedirse alguna pericia psicológica o alguna medida que sustente lo que se dice, para que de acuerdo a ello se aplique dicho beneficio sino en base a que se le va otorgar. Porque el Perú se maneja ese lapso de edad generando así una categoría extra para juzgar, si cabe mencionar que en otro momento se cuestionó y se promovió la idea de juzgar a los menores de edad como adultos porque se estaban excusando en su calidad de menores para no ser sancionados debidamente, la verdad es que la realidad ha llegado a superar a la norma.

Trabajos Previos

Antecedentes Internacionales

En las Investigaciones Internacionales encontramos, una investigación de Unicef Uruguay (2014) “La Rebaja de Edad de Imputabilidad” dentro de su investigación podemos diferir que dentro de la cual podemos entender que son imputables las personas que el ordenamiento considere que sea capaz de culpabilidad, es decir que quienes tienen capacidad de culpabilidad tenían la potestad de poder de realiza o no la conducta que realizaron, por tanto, estas resulten ser imputables y culpables por lo cual tengan que atribuírseles un pena o sanción por ello.

Supone además que asume la plena imputabilidad, la cual se asume cuando se alcanza la mayoría de edad, con lo que podemos intuir que en nuestro país ya se realizaría a la edad de 18 años según nuestra constitución. Además, Unicef realiza una diferenciación bastante dinámica respecto a que en una primera etapa de la vida somos exentos de responsabilidad penal tanto adolescentes y adultos, en la segunda etapa siendo adolescente estamos exentos de la responsabilidad penal de adultos, y en la tercera etapa que ya somos adultos no se está exentos de ninguna responsabilidad penal. Salvo obviamente causas que ya se encuentran establecidas en la norma. Con esto hace mención que hay una ley especial que vela por los menores de edad en caso de que estos se vean envueltos en casos relacionados a la ley.

La justificación de fijar uno de los límites de la capacidad de culpabilidad en la edad se explica por la constatación de que existe «una etapa en la evolución cronológica de la madurez del ser humano en la que aún no están plenamente asentados los rasgos psicológicos ni la personalidad». A partir de la mayoría de edad, se considera que el sujeto puede ser penalmente responsable dada su capacidad de actuar motivado por las normas, «salvo que tenga algún defecto o alteración psíquica que incida en su imputabilidad» (Muñoz Conde, 1985).

Conclusiones

1. Uruguay haciendo análisis de su realidad actual, comienza a generar posibles soluciones, tal como la de implementar a los agentes de 16 años ya no sean juzgados bajo un régimen especial.
2. Tomando conciencia de que esos agentes ya no son como antes los tomaban y ahora tienen otra posición para contrarrestarlos.
3. Se limitan debido a tratados internacionales y se confunde con la idea de querer darles pena máximo, cuando no es así.

Es pertinente ver este tema de manera más amplia ya que la repercusión lo amerita. Debido a que se ven comprometidos temas que se encuentran entre lazados de magnitud internacional y que esta problemática se ve reflejada en distintos puntos del mundo por ello recurriré a mencionar algunas realidades en otros países, realidad en algún momento Perú también se cuestionó. Previamente mencionaré Legislaciones Internacionales las siguientes son las más relevantes:

- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998:

En su Art. 26 en la cual se excluye a los menores de los 18 años respecto a la competencia de la Corte. Por tanto, esta corte no va tener pronunciamiento sobre ellos, sino sobre los mayores de 18 años.

- Reglas de Beijing de 1985

En su regla 4.1 podemos inferir que cuando los sistemas jurídicos coloquen la edad de mayoría de edad estos no deberían ser fijadas edades demasiado tempranas, sino una que pueda haber madurez emocional, mental e intelectual. Es decir, si Perú ya fijo los 18 años como mayoría de edad, no se debería generar una causal más de ello.

- Convención sobre los Derechos del Niño de 1989

En el Art. 1 hacen mención que esta convención se les deberá aplicar a todos los menores de edad. En su Art 40.3 establece que cada estado deberá definir y adoptar un sistema que este dirigido a quienes cuenten con la edad mínima de responsabilidad penal, como es el caso de los menores de 18 años. En el Art. 37: nos infiere que ningún menor deberá sufrir consecuencias o penas crueles, siendo la mayor sanción para estos en casos que así lo ameriten, será la detención y por un periodo muy breve.

Teniendo en cuenta que desde el 3 de agosto de 1990 en el Perú se suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño por lo que nos encontramos en la obligación de que nuestras normas estén vinculadas a las de la convención sobre los derechos del niño.

Antecedentes Nacionales

En los Antecedentes Nacionales podemos encontrar que ya existió una intención de derogar el artículo 22 y es que en el año 2013 se presentó el **Proyecto de Ley N° 2153/2012-CR** en la sustentaron su posición mediante al aspecto del desarrollo científico, cultural y económico, la tecnología es un factor bastante influyente debido a que tales avances generan unos conocimientos que sorprende la manera en que se dan los cambios.

El congresista e integrante de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, LEÓN (2013) sostuvo que frente a una posición de reducción amparados en tiempos pasados donde se determinaba como mayoría de edad a los 21 años, no se debería de seguir aplicando actualmente porque la edad actual para considerar la mayoría de edad según la constitución es de 18.

Por tanto, el avance y los cambios que se han dado traen consigo un manejo de información nueva y el cambio de paradigmas culturales que ha sido adoptada muy bien y genera una transición en el hombre, en distintos aspectos.

En la actualidad, la evolución psicobiosocial el ser humano podría asumir responsabilidad penal incluso antes de los 18 años. Si bien la neurociencia advierte que el cerebro humano no está totalmente maduro hasta que superamos los 30 años e incluso no alcanza su plenitud hasta cumplir los 40 años tal atingencia refuerza la posición de dejar sin efecto el artículo 22, debido a ello tendríamos una restricción hasta los 40. Y estoy de acuerdo, ya que la madurez puede tener referencias, pero no son exactas o definitivas y sin pruebas fehacientes no se debería dar tal beneficio.

Entonces, como es que nuestra carta magna va atribuirle derechos y obligaciones si es que se va considerar el supuesto de “transición de inmadurez”, desde los 18 hasta los 21 años, es decir según la constitución yo adquiero mis derechos y mis obligaciones a la edad de los 18 años, por lo que se acabó la época de estar resguardábamos bajo un representante y somos nosotros mismos quienes vamos a responder por nuestro actuar, puedo ejercer por ejemplo mi derecho a sufragar y podría también tramitar mi licencia de conducir la cual abarca gran responsabilidad, porque expongo mi actuar frente a la sociedad, entre otras acciones a las cuales según la constitución estoy apta pero como es que se crea una distinción a la hora de enfrentar cargos judiciales, ahí se hace un hincapié respecto a la madurez y se cuestiona mi capacidad con lo cual se estaría contradiciendo, discrepo completamente que se deba tener dicho trato diferencial aduciendo que no se encuentra plenamente en la madurez para asumir la sanción. Se estaría cuestionando la edad que la constitución pone para reconocernos como ciudadanos y todo lo que ello conlleva.

Realmente se le da un beneficio que considero yo es bastante bueno, debido a que en mi opinión para una persona beneficiarse o adquirir algo debe ganárselo o merecerlo siendo estos casos aislados porque no es ningún mérito ser un agente activo de un hecho delictivo, este sin ningún problema se merezca tantos y menos que no sean debidamente justificados o no calcen con ellos y aun así se les atribuya para su beneficio, debido a que en nuestro sistema ya se cuentan con beneficios o

factores que se toman en cuenta a la hora de determinarle la pena y la edad no debería tomar un protagonismo mayor ni generar un segundo beneficio de la misma índole.

Por tanto, volviendo a lo que viene a ser el sistema de justicia en el Perú, que trae consigo otro mal que lo adolece aparte de la corrupción, es la carga procesal, por lo que en busca de la mejora y eficiencia, se implementa el denominado “Proceso Inmediato”, el cual viene a ser más rápido frente a los casos de flagrancia, dentro de este proceso, existe un beneficio, mediante el cual el imputado se puede abocar para reducirle un sexto de su pena, si este decide reconocer el hecho del que se le acusa y así ahorrar todo el tiempo que tomaría si tuviese la negativa a sabiendas que es culpable, a esa acción se le llama “terminación Anticipada”.

Por lo cual no haría falta sumarle una reducción más, ya que, si se presenta la figura en la cual el sujeto activo cumpliría con la edad que establece el artículo 22, también se beneficiaría con una segunda reducción, lo cual es alarmante porque si ya se le tuvo consideración, hasta donde va llegar el sistema de justicia en beneficiar al imputado, si bien es cierto se le deben proteger sus derechos, no hay ninguna discusión en ello, pero son cosas muy distintas, proteger y beneficiar. Además, que un punto que no puede pasar desapercibido es que el artículo en cuestión, hace solo referencia en dos delitos específicos para quienes no aplicaría en casos de ser reincidentes, es decir, deja la carta abierta a que, en los delitos permitidos, pueden seguir beneficiándose así sean casos de reincidencia, la norma no lo aclara, y deja una interpretación ambigua.

Espinoza (2003) investigo su tesis de “*La Responsabilidad Penal Individual y la Jurisdicción en la Corte Penal Internacional*” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro de la cual nos hacen mención respecto a la Responsabilidad Individual, en la cual establece que la persona que cometa un delito sea este penalmente responsable. También podemos observar que hace mención de las

causas que podrían eximir de Responsabilidad Penal tales como una enfermedad o alguna deficiencia mental, estado de Intoxicación, legítima defensa entre supuestos establecidos y también encontramos a los menores de edad; de acuerdo a la Corte, no hay otra causa para eximir o restringir la responsabilidad penal.

Por lo que hace mención a la exclusión que se le hace a los menores de 18 años siendo así que estos no entran a la competencia de la Corte, por lo que podemos inferir que la Corte está dirigida a los mayores de 18 años, siendo esta la edad en la que se manejan los rangos de mayoría de edad y los cuales deberían ser reconocidos como tal para obtener deberes, obligaciones y asumir Responsabilidades que sus conductas ameriten. En ninguna parte se hace mención de una “transición”, por ya ser reconocidos como tales en todos sus extremos.

Conclusiones

1. Respecto a las causas que pueden eximir Responsabilidad Pena son sufrir de una enfermedad mental o una deficiencia mental.
2. En la Corte no se menciona que exista una causa de edad para eximir Responsabilidad Penal, ya que a los menores de edad ni los menciona, se entiende que mayores si responden a la Responsabilidad Penal.

Gálvez (2008) investigo en su tesis “Responsabilidad civil extracontractual y delito” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro de la cual nos hace mención que para llegar a la responsabilidad penal es preciso mencionar el derecho penal como tal en su función o facultad de ejercicio se prevenga conductas que generen perjuicio de interés público afectando la paz social, marcando una gran diferencia respecto a resguardar tanto los intereses de la sociedad y de la víctima sin dejar de resguardar también la del imputado.

JESCHECK y WEIGEND (2002) se refieren a la Responsabilidad Penal que debe “...proteger la convivencia en sociedad de las personas (...) tiene por ello, un significado fundamental como ordenamiento y protector de las relaciones sociales.

Para lo que podemos acotar que si bien se pueden tomar medidas para proteger los derechos del imputado, no se debe descuidar los derechos de la persona que sufrió el delito y de los derechos de la sociedad por la cual se debe preservar la paz y tranquilidad en la convivencia de la misma. Teniendo en cuenta que a la hora de que el imputado sea rehabilitado se encuentre con una mejor sociedad y de tal manera vea que con su actuar la estaba perjudicando, siendo el mismo lugar donde su familia vive y el daño que les podría pasar a ellos también si este seguía delinquir.

Galvez (2008) sostiene respecto a la responsabilidad Penal como la Responsabilidad Civil tienen el mismo objetivo, el cual es la protección de un bien jurídico, marcando como diferencia que el primer bien jurídico está relacionado más a un interés en particular de la persona, por otro lado, el segundo bien jurídico está apuntando a un interés público con una mayor transcendencia. Señalando también que en el ámbito Civil estaríamos podría ser resarcitoria y la Penal por otro lado más preventiva y punitiva.

Por tanto no desliga una diferencia en la responsabilidad en sí, es decir reconoce que el bien jurídico tiene un interés diferente pero no demarca que en la Responsabilidad Civil se asume a una edad y la Responsabilidad en otra, se parte de una misma edad, la cual está establecida en la constitución.

Galvez (2008) se refiere a la Responsabilidad Penal como la que con su designación va impactar a la realidad social de manera que lanza un mensaje de la protección del bien jurídico vulnerado y de cómo controla o sanciona la conducta del hecho

delictivo, siendo esa posiblemente la mayor diferenciación con la civil que está dirigida más a reparar el bien jurídico dañado y listo.

Entonces, se puede colegir que si bien se protegen bienes jurídicos que demarcan distintos intereses e impactos, refiriéndose a que uno puede solucionarse o repararse de manera remunerativa sin mayor perjuicio, la otra es más amplia e intervienen más factores, tales como la protección del bien o la integridad de la víctima y la responsabilidad del imputado previendo la sanción posible de una privación de su libertad más una reparación económica aun así protegiendo sus derechos, todo ello tiene un impacto a la sociedad tanto como su daño y su medida a tomar para afrontarla.

Conclusiones

1. Qué la Responsabilidad Penal y la Responsabilidad Civil tienen como su función proteger un bien jurídico, con la distinción del interés y del impacto que genera.
2. Que la Responsabilidad Civil es más resarcitoria y la Responsabilidad Penal por otro lado más preventiva y punitiva.
3. Que la sanción Penal repercute más fuerte en el ámbito social de manera en que se protege el bien jurídico de la víctima, la sanción y posible privación de libertad del imputado, creando una visión para sociedad de acuerdo a ello.

Burgos (2002) en su investigación de tesis “El Proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad” en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual refiere respecto a que toda materia respecto al ordenamiento jurídico se tiene necesaria y fuertemente relación con la constitución y la materia penal no es ajena a eso, más aun su vínculo es más intenso. Esto se debe a que en materia penal se tocan restricciones sobre libertades y derechos fundamentales de las personas siendo justamente los dos importantes puntos que podemos apreciar en la constitución por lo que pueden generarse restricciones.

Se colige que en general toda materia se encuentra bajo el manto de la constitucional, pero en materia penal se encuentra de una u otra manera más condicionado a regirse sin causar perjuicio a lo establecido en la constitución, por lo que su accionar causa, la privación privativa de libertad y están involucrados los derechos fundamentales de aquí parto a mi posición sobre que como es que nuestra constitución reconozca a los 18 años plenos para ejercer nuestra voluntad por contar con la capacidad siendo acreedores de derecho y obligaciones.

En ese sentido sostiene que en el proceso penal tiene discrepancia referente al poder punitivo estatal y la privación de libertad del imputado proviniendo de esa manera que el vínculo entre el proceso penal con respecto a lo constitucional. (TIEDEMANN, 1991, p.157)

De ese modo queda en evidencia que como sostiene Klaus (1989) que el derecho penal de una forma u otra termina dependiendo del derecho constitucional. A fin de perseverar en los derechos fundamentales de ambas partes y probablemente más en particular del imputado. Además GÓMEZ (1992) sostiene que por supremacía e importancia está la necesidad de un debido proceso, en beneficio de ambas partes.

Conclusiones

1. El proceso penal se encuentran involucrados los derechos fundamentales y se pone en cuestión la libertad del imputado en merito a ello se entiende que por naturaleza tiene fundamentos constitucionales.
2. La ejecución del derecho penal tiene como guía la del derecho constitucional por la cual se debe llevar, es decir, no puede contraponerse a nada de lo que se encuentre establecido ahí.
3. Una importante razón por la cual se dice que el derecho penal está sometido al derecho constitucional es por la primacía del debido proceso en beneficio de las partes.

El año pasado durante el X Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Penal, el profesor de derecho penal expuso su posición frente a este conflicto. Caro (2016) sostuvo que se podían tomar dos decisiones se podría derogar el artículo o se le debía de dar sentido a la misma, haciendo referencia a la problemática del 2do párrafo, defendiendo su posición señalando que para él si se estaría vulnerando el principio de igualdad. Sin perjuicio a ello también señalo que cuando se alcanza la mayoría de edad en término jurídicos ya es competente y en si hablamos referentemente a la materia penal es titular tanto de derecho como de obligaciones.

Aceptando que dicho artículo tiene deficiencias y al tener como opción su derogación es porque su vigencia en la actualidad no tiene mayor aporte, es decir, si se deroga no crearía un perjuicio o daño ni a los imputados y mucho menos a la sociedad. Pero de seguir en vigencia según su parecer se debería corregir la exclusión a los agentes que cometieran delitos graves.

Según el informe que presento el INEI en octubre del 2016

Precisó que este sistema fue con el propósito de contar con información estadística para el diseño de políticas de prevención, control y lucha contra la criminalidad. En el periodo octubre 2015 – marzo 2016, el 32,5% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de un hecho delictivo; de los que podemos señalar lo siguiente el 45,7% sufrió el robo, 16,8% intento de robo, 6,3% robo de vehículo, 4,9% víctima de maltrato u ofensa sexual, 3,2% intento de robo de vehículo, 2,3% robo de negocio, 1,7% secuestro y extorsión.

Según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, en el periodo octubre 2015 - marzo 2016, la tasa de percepción de inseguridad llegó a 89,5; lo que quiere decir que, un aproximado de 90 personas de cada 100 habitantes de 15 y más años de edad cree que será víctima de un hecho delictivo.

Teorías Relacionadas al Tema

A continuación, mencionare algunos conceptos básicos de los temas y términos referidos en el presente trabajo, por ello como es información importante.

Viendo el término de **Responsabilidad** se entiende por un hecho cometido en contra de la ley penal y quién la realiza es imputable por lo que como consecuencia este asume una pena, además de que si lo amerita este cumpla con cubrir una responsabilidad civil por el daño y perjuicio causado.

Lo que vendría a ser referido a nuestro tema, sería de la siguiente manera, la responsabilidad se le llama a la atribución de una conducta típica y antijurídica.

Por lo que la Responsabilidad Restringida hace referencia a la atribución limitada debido a que, si el agente es imputable o inimputable, de acuerdo a ello tiene una limitación a la hora de asumir su responsabilidad, ya que podría ser total o relativa y con ello se ve afectada su pena, ya que sufriría una disminución de ser el caso inimputable. (Álvarez, 2014)

La Responsabilidad Restringida por edad, según el artículo en mención, nos dice que, quienes sean los agentes activos de los hechos delictivos, que se encuentren entre las edades de 18 a 21 años o quienes se encuentren en una edad mayor a los 65 años, tendrán como beneficio una reducción prudencial de su pena, justificando sus acciones por encontrarse en una aparente o lo que algunos llaman como posible “transición de madurez” o en el caso de los mayores de 65 años pérdida de lucidez o aquejan de un mal similar, en la cual no se encontrarían en su total facultad para discernir que su comportamiento está mal o bien, por lo que se le debe medir de manera restringida si infringe o no una ley. (Código Penal, 2004, Artº 22)

Terminología de Derecho según ALZAMORA citado por RENDÓN, J (1989) sostuvo que proviene de la palabra en latín “directum” que significa dirigir por lo que se colige que quiere decir gobernar o dirigir. (p12)

Ahora bien para RABRUCH derecho se define de la siguiente manera “como el conjunto de las normas generales y positivas que regulan la vida social”. Por ende entiéndase vida social, el comportamiento humano frente a la sociedad, de la cual se puede colegir que todas las generaciones o los tiempos no son iguales. Para que un conjunto de normas de una época se apliquen en una muy distinta no se estaría regulando lo que señala Radcruch. (p47)

Madurez

De acuerdo con Allport (1961) sostiene que la maduración es diferenciación e integración, hace referencia a la especialización de las capacidades y estructuras psicofísicas para una función específica, de acuerdo a donde se desarrolla y en el entorno que se desarrolla. Lo que quiere decir que poco a poco mientras se va avanzando se van estableciendo características que se van adaptando, integrando con su entorno. Luego tenemos un conjunto de factores que intervienen, tales como los sentimientos, las actitudes, los valores, los intereses, y por último, a la personalidad, que es la integración máxima.

Según Khonobel, M (19649) nos indica que el medio relevante es el aprendizaje. Se entiende de cierto modo que la personalidad es el resultado de la integración del individuo con sus aspectos genéticos-biológicos y su entorno, ya que sin la adaptación no existiría desarrollo posible.

Si nos entramos un poco en la ciencia podemos distinguir que “la neurociencia cognitiva permite en las personas optimizar el procesamiento de la información, desarrollar las inteligencias múltiples, el conocimiento y desarrollo de los sistemas representacionales, el desarrollo de los sistemas de memoria, la generación de significados funcionales, y el desarrollo de inteligencia emocional”. (Gómez, 2004)

Entendemos que para la maduración existen varios factores y aspectos a desarrollar, que pueden tener una distinción por la edad pero no una determinación, de modo que tiene como gran relevancia el entorno, por lo que en nuestro entorno o

actualidad queda en evidencia que en nuestra sociedad están establecido los suficientes parámetros o delimitaciones para que no solo personas mayores de 18 años comprendan entre el bien o el mal, sino incluso menores pueden comprenderlo.

La madurez no tiene una edad donde empieza, se va dando de acuerdo a la realidad de cada persona y como esta se acopla en el exterior de su entorno.

Proceso Inmediato: tenemos como preámbulo a HUAYLLA (2015) quien sostiene que el Código Procesal Penal en el Perú fue implementado en primera medida en distritos judiciales y fiscales fuera de lima para luego ser implementando progresivamente, lo cual se dio por motivo que existían factores ya sean de complejidad, población, aspectos geográficos, variables políticas, presupuestos, recursos humanos e infraestructura, esa fue la razón de que tuvo carácter progresivo. Trayendo consigo un análisis de la reforma y de observar de qué puntos carecía en su aplicación para ir corrigiéndolo en su funcionamiento. (p.216)

Los artículos 447° y 448° se han visto en la necesidad de modificar debido a la carga procesal que afronta nuestro sistema judicial, por lo que se ha establecido un nuevo mecanismo, llamado Proceso Inmediato en casos de flagrancia, dicha medida ha sido adoptada como solución para liberar la carga que acongoja nuestro sistema, ya que frente a la existencia de casos que no impliquen o no sean tan complejos y a fin que sean resueltos de manera rápida y eficaz, es la finalidad de la inclusión del Proceso Inmediato.

Según sostiene SANCHEZ (2016) que el proceso inmediato es considerado un proceso especial que se encuentra establecido en el Nuevo Código Procesal Penal el cual se da bajo tres supuestos que son los siguientes, cuando el sujeto es sorprendido en flagrante delito, el sujeto confiesa el delito y cuando se cuenta con suficiente medio probatorio. Y solo en casos de flagrancia se puede invocar este proceso

Dicho proceso tiene 7 características, como principal la rapidez en donde con el Nuevo Código Procesal Penal puede fijar que casos se deben investigar, además de contar con la audiencia oral la cual es de mucha ayuda para que el juez decida en menor tiempo; otra característica que influye bastante en este proceso tenemos a la Oralidad que es herramienta principal para todo proceso; como tercera característica tenemos la Imparcialidad en la cual el juez durante la audiencia escucha al fiscal y la defensa exponer sus alegatos y fundamentos los cuales determinaran a la hora de sentenciar; en la cuarta característica esta la Inmediación donde las partes tendrán contacto directo con el juez; como quinta característica esta la Transparencia.

Respecto a la flagrancia tenemos varios puntos a tomar por ejemplo debemos recordar a CHIOSSONE que sostiene sobre “delito infraganti” se entiende como el delito que acaba de cometerse o se está cometiendo, además el hace referencia que al término cuasi flagrancia, es mismo que se entiende si es que el sujeto autor del delito se encuentra perseguido por las autoridades por encontrarse con algún objeto prueba del delito.

Sin embargo tenemos que para QUERALT delito flagrante es únicamente cuando el delito se está perpetrando o se acaba de suscitar frente a las autoridades, es decir, que el hecho sea evidente por darse en el preciso momento que lo sorprenden.

Además, tenemos a CARNELUTTI (1950) quien sostiene que el delito flagrante no solo es la acción del delito en el preciso momento, sino que existe una persona que lo presencia, por tanto ve que el delito se está consumando.

Tenemos a MANZINI (1952) quien señala según costumbre romanas, en casos de flagrancia el arresto se daba sin mandato u orden de juez, simplemente por encontrar mientras cometía el delito se le privaba provisionalmente de su libertad.

Cabe señalar este punto en particular que nos puede plantear o abrir un poco la perspectiva de la norma con la realidad, para lo cual tenemos a ARANA (2002) quien

nos muestra un punto bastante valido, respecto a hechos suscitados en la sierra de nuestro país, donde se organizan las denominadas rondas campesinas cuando van a ejercer justicia por el robo de un ganado o un hecho delictivo que por obvias condiciones la detención o persecución podría tomar más tiempo y del alcance policial con que cuentan. Por lo que se entienden algunas medidas que se toman por el hecho de la realidad en la que viven, por lo cual la inmediatez no se aplica como lo dice en la teoría.

Principio de Oportunidad es el medio que puede acogerse el sujeto activo para llegar a una conciliación, hecho que lo va favorecer evidentemente, ya que por reconocer su error y mostrar arrepentimiento colaborando con la justicia este salga beneficiado por esa acción.

Asimismo, SANCHEZ (2004) sostiene que principio de oportunidad está en la poca relevancia social del delito, por lo cual no existe un interés social de punición y se pueden encontrar otras soluciones sin llegar a instancias judiciales, es decir que el interés viene a ser de manera individual.

Frente a otra figura tenemos a YATACO (2003) que sostiene la “ratio legis” de la vigencia del principio de oportunidad está ligado a una negociación jurídica – procesal ya que en casos no tan graves se busca la manera de evitar tiempo y onerosidad que es lo que demanda todo el proceso, el cual mediante un acuerdo se resarce el daño, se sanciona de manera leve y así ambas partes están satisfechas con los resultados.

La Terminación anticipada para su definición debemos mencionar a IBARRA quien sostiene que la terminación anticipada tiene como naturaleza una negociación penal, mediante la cual se genera un acuerdo entre el fiscal y el sujeto activo sobre la determinación de la pena y otras consecuencias como la que se fijaría como reparación civil, pero icho acuerdo lo define el juez de investigación preparatoria haciendo análisis de su licitud y también la proporcionalidad.

Considerándose que la terminación anticipada se ha venido convirtiendo en uno de los mecanismos por el que más se acogen los sujetos activos por el beneficio que esta les da. Mencionando además que este mecanismo no tiene restricción para ningún delito.

Y en el proceso inmediato con mayor razón ya que al sujeto activo le conviene negociar su pena y por tanto la reparación civil. Precisando además que el fiscal observa su condición y el grado del delito cometido por el cual llegan a una conclusión que se la plantean al juez y este la aprueba o la desaprueba.

El instituto de Defensa Legal hace referencia en su cartilla informativa al Proceso inmediato por ser reconocido como un proceso especial que anula la etapa intermedia llegando directamente a la investigación preliminar a la etapa de la audiencia. Teniendo en cuenta que el fiscal cuente con los elementos de convicción suficientes para encontrar la responsabilidad del imputado. Además que Conforme el Art. 446 del Nuevo Código Procesal Penal, los requisitos para que el proceso inmediato se suscite, se debe cumplir uno de estos 3 supuestos:

- a) Cuando el sujeto activo ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito
- b) Cuando el sujeto activo ha confesado su delito
- c) Cuando los elementos de convicción recogido durante las diligencias preliminares, y previo interrogatorio, sean evidentes.

Por tanto si se cuenta uno de los 3 supuestos, se da paso al proceso inmediato.

Debido a los grandes casos de corrupción, en el Proceso Inmediato marca la diferencia ya que este se resuelve todo mediante la audiencia oral y en su sexta característica se le suma y es que la audiencia es Pública, todo se realiza con la presencia de las partes; y tiene como ultima caracteriza la de Salidas Alternativas, en las cuales de acuerdo al caso lo amerite se pueden encontrar posibles soluciones sin llegar al juicio oral.

Lo cual genera una crítica, ya que el sistema judicial en el intento de mejorar el servicio de justicia crea y da paso a mecanismos como el Proceso Inmediato, se vea de alguna manera entorpecido al limitarlos con normativas como la del artículo 22, ya que bajo esa premisa se perjudica a la sociedad con la contemplación de solo por encontrarse en un etario de edad como sustento suficiente para reducirle prudencialmente la pena cuando ya se cuenta dentro de este Proceso Inmediato con la terminación anticipada que le reduce la pena en un sexto con solo reconocer su culpa, sin decir que en la prognosis de la pena ya se analizan factores para la determinación de la pena.

La determinación de la pena

Oré (2013) sostiene que El proceso de determinación de la pena es un proceso de gran complejidad en el cual se admite dos instancias, una es la determinación legal la cual se da en lo abstracto, ya que es acorde al tipo penal y al marco previsto entre mínimo y máximo dentro del Código Penal específicamente para cada delito. El segundo es la ley mediante el cual presenta circunstancias modificativas respecto al alcance de la responsabilidad penal, haciendo clara referencia si se puede atenuar o agravar las penas fijadas en abstracto para cada delito. Criterios a tratar en el artículo 46 del Código Penal.

Tenemos también a JIMÈNEZ (2010) quien considera que existen 3 tipos de penas, dentro de las cuales, tenemos las siguientes penas que mencionaré:

La Pena Básica: mediante en la cual la doctrina, establece que la Pena Básica es el intervalo de pena establecido por el legislador, lo cual quiere decir que el material punitivo que se determina entre el extremo mínimo y el extremo máximo de los tipos penales. Un ejemplo claro y conciso seria cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la sentencia del Expediente EXP. N° A.V. 19 – 2001:

“En la primera etapa se deben definir los límites de la pena o penas aplicables. Se trata de la identificación de la pena básica, en cuya virtud corresponde establecer un espacio punitivo que tiene un mínimo o límite inicial y un máximo o límite final...”

Pena Concreta: la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en el mismo proceso indicó:

“...En la segunda etapa se debe identificar la pena concreta dentro del espacio y límite prefijados por la pena básica en la etapa precedente. Se realiza en función a la presencia de circunstancias legalmente relevantes y que están presentes en el caso. Las circunstancias son factores o indicadores de carácter objetivo o subjetivo que ayudan a la medición de la intensidad de un delito, cuya esencia permanece intacta. Es decir, posibilitan apreciar la mayor o menor desvaloración de la conducta ilícita –antijuridicidad del hecho– o el mayor o menor grado de reproche que cabe formular al autor de dicha conducta –culpabilidad del agente–, permitiendo de este modo ponderar el alcance cualitativo y cuantitativo de la pena que debe imponerse...”

De lo cual podemos colegir que la Sala Especial de la Corte Suprema, contextualiza lo indicado en una nota al pie de página, en la cual se visualiza: “Tiene expuesto la Corte Suprema que para determinar el marco penal concreto, debe tenerse en cuenta las circunstancias atenuantes o agravantes genéricas, a partir del conjunto de factores fijados por los artículos 45° y 46° del Código Penal...”

Pena Conminada: se debe comprender como la pena establecida en el Tipo Penal. La determinación de la pena, trae consigo necesariamente la sistematización de todas las normas penales que a ella se refieran, tales como las que se encuentran en el Código Penal, como son la Omisión impropia, tentativa, Responsabilidad Restringida, Responsabilidad restringida por Edad, Agravante, reincidencias, habitualidad, etc. En el Código Procesal Penal también tenemos la Confesión Sincera, terminación anticipada, colaboración eficaz, entre otras.

Nuevo Proceso Garantista

Debido a la implementación del nuevo código procesal penal tenemos que estamos frente a una figura que protege los derechos fundamentales del imputado a mayor escala que antes, Según RIVEROS citado por Abanto, J (2012) tenemos que con el fin de garantizar de manera enfática los derechos fundamentales del inculpado, lo que se busca es un reconocimiento no sólo formal sino material.

De esta manera nos sugiere que mediante este código procesal penal deben estar ligadas y de ser el caso consultadas con disposiciones constitucionales correspondientes, como puede ser la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

NEYRA (2012) Se debe buscar un sistema procesal respetuoso de las garantías del debido proceso y al mismo tiempo que obtenga la eficacia de dicho proceso, materializando la tutela jurisdiccional efectiva.

San Martín Castro (2006) nos dice que toda víctima de un hecho delictivo tiene como derecho fundamental acceder a un proceso y obtener justicia de modo que se alcance una respuesta adecuada de parte de la justicia, la cual sea eficaz a su pretensión.

Atenuante, podríamos definirlo como que es a quien se le atribuye menor responsabilidad criminal y en la RAE encontramos consecuencia atenuante y consecuencia eximente. Las que definen primero a la atenuante como reducir la responsabilidad que cae sobre el imputado y a la eximente como la que exonera o libra de la responsabilidad.

Según GONZALES (2011) sostiene que el término atenuante que dentro de la materia penal existen ciertas causas que disminuyen la responsabilidad penal, pero no la anulan en su totalidad tal es el caso de la minoría de edad, ser menor de dieciocho años. También dice que el arrepentimiento espontaneo o confesar a las autoridad son reconocidos como circunstancia atenuantes.

Eximente, es por ejemplo el caso de alguna enfermedad mental que libera de responsabilidad, por tanto se le exime la total responsabilidad.

Además hace mención del término **Agravante** de sostiene que es lo opuesto a la atenuante, debido a que este obtiene mayor responsabilidad, ya que se muestra mayor culpabilidad o ensañamiento. Como una de sus primeras características la premeditación, hasta el momento de cometer el delito.

La diferencia se marca en una con la otra porque en las atenuantes son las que les falta algo para ser exoneradas, es decir tiene un motivo para disminuirle, revisando factores por lo cual sustente esa reducción, pero más no para excluirlo. Siendo así la atenuante una razón a tomar para reducir la pena, pero es guiada por la edad, ya que en la presente investigación hablamos de personas ya reconocida como mayores de edad. Y en el caso de agravante es lo opuesto, ya que genera mayor responsabilidad por su manera de obrar con premeditación y alevosía.

Por tanto, recaemos en nuestro tema, la Responsabilidad que se debe asumir y si la misma merece restricciones por el hecho de encontrarse en una edad cuestionable o algún factor que marque la diferencia, sobre si alcanzo o no al grado de madurez al momento de cometer el acto, si tenía pleno conocimiento de lo que estaba realizando o no, es la que realmente determina la sanción y la que el magistrado utiliza a la hora de fijar la pena, para que darle un protagonismo mayor a uno de esos factores.

Sin embargo, se tiene mucha contemplación con el sujeto activo, lo cual llama mucho la atención de la sociedad y con justa razón, ya que se le da un beneficio de manera tan abierta que por el solo hecho de encontrarse en una edad le va valer para ser acreedor a una reducción prudencial de la pena, bajo un supuesto que podría darse en algún caso, sin embargo, se le da a todo aquel que tenga esa edad sin comprobar si el supuesto le aplica o no, es ahí donde el ciudadano se ve desprotegido. Por lo cual en los tiempos que nos encontramos cada vez se desconfía más, la gente vive con temor a lo que pueda suceder, esta situación ya ha cansado a la sociedad porque no hay mejora y brindar un beneficio basado en un supuesto es darles carta

libre a muchos sujetos activos se benefician de ello para seguir delinquiendo y no sean sancionados como deberían.

Hurto Agravado se encuentra establecido en el artículo 186 del Código Penal y establece las siguientes circunstancias; cuando el hurto es cometido: En una casa habitada, durante la noche; con la modalidad, destrucción o rotura de obstáculos; mediante concurso de dos o más personas y otras especificaciones más, son las que agravan el denominado Hurto simple.

La imputabilidad es considerada a la capacidad psíquica de un individuo, que comprende la antijuridicidad de su comportamiento y según la ley tiene la capacidad para reconocer sus acciones. Caso contrario estaríamos frente a una figura de un sujeto Inimputable. Asimismo CARDENAS (2011) sostiene que se considera imputable cuando el agente posee la facultad de discernir ya nos estemos refiriendo a la razón o como la llaman algunos autores a la conciencia sobre el carácter delictuoso de las acciones o también si fuesen omisiones frente a la obligación penal de responsabilidad.

La inimputabilidad es considerada a la falta de capacidad psíquica de un individuo, por lo cual la ley lo determina como que no tiene la capacidad para responder por sus actos como cualquier otra persona, debido a su condición, llámese alteraciones mentales o alguna enfermedad de esa índole. (Machicado, 2013)

Bustos (2004) señala que la figura de la *alic*, da paso al imputar hechos realizados en situación de inimputabilidad en algunos casos en que el sujeto activo se hubiese puesto en esa situación, bien sea con el propósito de delinquir o sino tenía esa intención, igual podía saber que era previsible que en ese estado cometiera un hecho punible.

Por lo tanto, es válido la intención de beneficiarlo en busca de un resultado positivo como regenerarlo e integrarlo a la sociedad, pero ya en el proceso inmediato contamos con la confesión sincera la cual te favorece y te permite una terminación

anticipada, a eso hay que sumarle la responsabilidad restringida, sinceramente me parece ya dar muchos beneficios.

Es decir, si vamos a decir que por el tema de la edad, en el supuesto que entre los 18 y 21 años se encuentran en un trance de madurez, como es que la ley con mayor rango, es decir, la Constitución Política del Perú 1993 considera en su artículo 30° declarando de manera explícita que: “Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años”, entonces nos encontramos en una contradicción ya que según nuestra legislación nos dice que a partir de los 18 es considerado un ciudadano y se le atribuye todo lo que ello conlleva pero a la hora de juzgarlo ahí no se les toma de la misma perspectiva, ese artículo lleva años y no ha presentado ningún tipo de mejora, se debe tomar cartas en el asunto, cada día la delincuencia creciendo y se debe de actuar o seguiremos lamentándonos.

Examen Psicológico según Ucha (2009) sostiene que el test psicológico, también conocido como una prueba psicológica, mediante el cual se utiliza para evaluar una gama de características de la psicológica, puede ser salud mental o aquellos rasgos esenciales y generales que delimitan y hacen distinción de la personalidad de una persona o en qué estado se encuentra esta.

Estos tipos de test suele aplicarse en contexto jurídico, pueden ser de gran utilidad y cumplir con diversas finalidades.

Recuperado de <https://www.definicionabc.com/social/test-psicologico.php>

Vigencia del Artículo 22 en el Código Penal Peruano

Ahora bien desarrollaré de manera más detallada el Artículo en cuestión que ya lleva bastante tiempo estando en vigencia, donde la realidad era totalmente distinta y podría haber tenido otra dirección en ese momento ya que por ese entonces la mayoría de edad era otra a la que se maneja en la actualidad, pero a partir de la constitución del 1979 en el artículo 65 y 1993 en el artículo 33, reconocen al ciudadano peruano a la edad de 18 años. Por lo que su aplicación en la actualidad carece de sustento firme, la realidad viene sobrepasando la norma de manera impresionante, ya que los hechos no calzan, todo avanza, todo cambia, durante la

historia se manejaron edades como 21 años y 25 años para recién ser reconocidos como ciudadanos, pero eso es pasado, justamente por algo se cambiaron la edad tope y es por ello que hoy se le reconoce a la edad de 18 años.

Ahora este artículo sufrió cambios, los que mencionaré a continuación su historial ya que dicho artículo inicio señalando que aquel agente que se encuentre entre 18 y 21 años o sea mayor a los 25 años, a la hora de cometer la infracción, se le reducirá de manera prudencial la pena que se encuentre establecida para el hecho punible cometido. (Código Penal, 2004, Artº 22)

Entonces en 1998 tuvo su primera modificación, la misma que llego con la Ley Nº 27024, la cual mantuvo el primer párrafo intacto, la variación viene a ser la inclusión de un segundo párrafo el cual trae consigo mayor controversia debido a que en el párrafo incluido se señala una exclusión a quienes hayan cometido delitos con pena mayor a los 25 años o cadena perpetua.

Como podemos apreciar, aquí se genera la distinción de acuerdo al delito que se comete, no podrá obtener el beneficio de la reducción prudencial de la pena, aunque este cuente con la edad que indica en su primer párrafo, claramente se vulnera el principio de igualdad.

Pero las modificaciones siguieron y en el 2009 tuvo su segunda modificación con la Ley Nº 29439, se mantiene el segundo párrafo y es el primer párrafo el cual sufre una variación porque se le añade un fragmento en la parte final, que indica que quienes sean casos de reincidencias en dos casos, el tercer párrafo del artículo 111 y cuarto párrafo del artículo 124. Podemos notar que hacen mención en casos de reincidencia, pero en delitos específicos, quiere decir o dando a entender que, si están de forma reiterada en otros delitos, si podrían acogerse a dicho artículo, lo que resultaría bastante ilógico, como darle una reducción bajo el mismo supuesto por segunda vez.

Aún con la Ley Nº 30076 en el 2013, tuvo su tercera modificación, la cual se basó en aumentar los delitos en los cuales el sujeto activo está excluido.

En el 2015 tuvo su cuarta y última modificación por la Decreto Legislativo N° 118, la cual es la que se encuentra vigente hasta la actualidad y cómo podemos apreciar que en las dos últimas modificaciones solo se ha modificado la lista de delitos en los cuales no se debe aplicar la Restricción de Responsabilidad por Edad, lo cual trae consigo otro pronunciamiento el cual esta vez fue con un acuerdo plenario N° 4-2008/CJ-116 y está dirigido a la facultad que tiene el magistrado de aplicar dicha norma si este la cree conveniente. Por lo que podemos notar que, si bien se sigue buscando esclarecer puntos controversiales, igual se mantienen o se generan otros, sigue estando en debate el tema de la inconstitucionalidad por la vulneración al principio de igual.

En tanto, Alvarez (2004) al agente que incurra de manera reiterada en delito, más específicamente haciendo referencia a la reincidencia, misma que se encuentra actualmente prevista en el artículo primero de la Ley N° 30076, la misma que fue publicada el 19 agosto 2013, que modificó el artículo 46-B del Código Penal, por lo que tampoco se aplicaría la responsabilidad penal restringida los que están previstos en el tercer párrafo del artículo 111° del Código Penal.

Además, también hace referencia al delito de lesiones culposas establecido en el cuarto párrafo del artículo 124° del Código Penal, bajo la utilización de vehículo motorizado, o cuanto el agente actúa bajo los efectos de drogas o alcohol en una proporción mayor de 0.5 gramos litro de sangre en el caso de transporte público, y de 0.25 gramos litros cuando el vehículo era de transporte público de pasajeros.

Además que se generó el Acuerdo Plenario N.º 4-2008/CJ-116 (fojas 17), el cual indica que quedaría de manera facultativa si este creyera que deba aplicar o no el segundo párrafo que se encuentra en controversia por su supuesta vulneración del principio de igualdad, medida que no comparto, debido a que se debe establecer ya una norma que esclarezca tal punto, es increíble la cantidad de conflictos que crea esta artículo.

Tenemos además como referente que en la comisión de justicia y derechos humanos periodo anual de sesiones 2012-2013 y en el acta de la décima séptima sesión

ordinaria de la comisión de justicia y derechos humanos, donde se tocaron puntos relacionados a mi problemática. En dicha sesión se planteó incorporar a las faltas graves y reconocerlas como delitos, en los casos que existan reincidencia y habitualidad. Mencionando que el hurto agravado es uno de los delitos que generan mayor inseguridad ciudadana, por la cantidad de denuncias presentadas. También se mencionó que, en los casos que sean reincidentes o habituales se les deba restringir el beneficio de reducción de pena, además se refirieron a los casos de la terminación anticipada y la confesión sincera en los cuales también proponían que se limiten los beneficios.

El congresista Octavio Salazar (2013) sustento su posición frente a los proyectos de ley presentado por su persona, con el fin de contribuir de manera positiva con el problema de la inseguridad ciudadana y en la sesión respecto al proyecto de ley 177/2011-CR menciona al Efecto de la Confesión Sincera establecido en el artículo 161 y además, respecto a la terminación anticipada menciona que son figuras que se aplican en países como Colombia, Chile y otros países pero la diferencia se marca en que se aplican solo para delitos menores y no, como se realiza en Perú, generando así una terrible impunidad.

Como podemos entender que en esta sesión como en varias otras, se encuentra presente el tema de la inseguridad ciudadana, lo particular es la diferencia que remarcan respecto a los beneficios dependiendo del delito, cuando saben que eso infringe el principio de igualdad, sin enfocarse en lo que vendría a ser la motivación de la norma, si es meritoria o no.

Podemos mencionar como referente al Principio de Igualdad, porque frente a este, estamos hablando de que se debe aplicar, no solo frente a una situación en la que se deba proteger sino además cuando se deba sancionar. Así mismo haciendo mención a que todos somos iguales frente a la ley para ser juzgados.

Por lo que podemos mencionar que la legislación italiana referente al tema, pues esta hace referencia a la igualdad de ciudadanos sin distinción frente a la ley, en

mención de que no se deben desentender de lo que está establecido en la constitución identificada como ley general frente a una ley singular, no habría porque hacer una diferenciación, que cree situaciones diversas, dando así paso a una nueva categoría de ciudadanos.

Por lo que puedo colegir, no debiendo basarse en un precedente, menos aún motivar bajo un supuesto algo que podría afectar el bienestar de la sociedad, bienes el cual ya se encuentra perturbado desde hace tiempo. Es por este tipo de determinaciones solo crean más conflictos, los cuales son innecesarios.

Entonces comprendemos claramente, si bien es cierto no se puede ir de manera radical y se debe ser sumamente precavido al momento de pretender realizar un cambio de esta magnitud para que la edad no sea una excusa para cubrir hechos delictivos, sin embargo, al momento de beneficiarlos no existe la misma proporcionalidad y además que este hace referencia a los menores de edad, no como en nuestro país que bajo el artículo 22 del código Penal quiere seguir protegiendo a un ya reconocido ciudadano como si este aún fuese menor, ya que de cierta manera, es lo que hace con la aplicación de este artículo.

Si el Perú viendo su realidad, en su momento creyó conveniente o al menos tuvo iniciativa de tomar medidas frente a los menores de edad que cometieran hechos delictivos, como es que con el artículo de Responsabilidad Restringida por edad se quiera generar por decirlo de alguna manera, crear una categoría intermedia entre los menos de edad y los mayores de edad, creando así una categoría de “transición de madurez”, estaría creando su propia trampa, y debido a casos como este es que se truncan avances y mejoras, cuando realmente urge un cambio para que la sociedad se sienta respaldada y segura.

Vivimos en una sociedad que proteger a cierto sector o sujeto individual lo cual resulta más alarmante porque si intenta proteger a estos sujetos que estén en transición de madurez, deberían prever que no se esté exponiendo a toda una

sociedad por ello, nuestro sistema de justicia históricamente ha sido calificado con elevados índices de impunidad e ineficacia.

Debido a los problemas de la aplicación de este artículo referente a los agentes excluidos, se genera la atenuación de la pena por la responsabilidad restringida por la edad como facultativa, pero no obligatoria para los jueces, lo cual también es objeto de crítica debido a que no se comprende con qué fin se deja esa potestad de manera abierta cuando no es necesario, de por sí el juez tiene un criterio y analiza previo para determinar la pena. Este artículo trae consigo tantos traspiés que no se comprende cómo sigue en vigencia, con tantas modificaciones que terminan enredando más y al final en el acuerdo plenario N° 4-2008/CJ-116 dispongan que quede a facultad del juez, el cual redundante, ya que la potestad del juez está establecida y los criterios a utilizar no deben tener la naturaleza que contiene el artículo 22 que da prioridad solo al factor cronológico de edad.

Sin embargo, tenemos que para merecer una imputación penal deben de tomarse en cuenta el estatus del sujeto con la sociedad y como se desarrolla en ella, es decir cómo se maneja y según su cuestionamiento del orden normativo de la sociedad, este decida de qué manera se desenvuelve, por lo cual la culpabilidad se encontraría acorde a la capacidad del sujeto. (García, 2008)

Entonces entendemos que este es libre de manifestar su comportamiento frente a la sociedad y en consecuencia al ordenamiento jurídico por el cual nos regimos todos los ciudadanos, su capacidad tiene una línea y es la mayoría de edad, no hay una razón suficiente para marcar otra línea más, insistiendo que no se debe generar una categoría transitoria porque no tiene fundamento firme que la motive.

Formulación del problema

Para una investigación es necesario que exista una problemática, porque desde ahí parte la investigación y será lo que motive para alcanzar una exhaustiva

investigación que merezca la pena presentar, siendo de tal manera poder contribuir con información que sea importante y relevante. (Bernal (s/f) p.84)

Además del párrafo anterior, podemos decir también que las interrogantes que genera un problema o conflicto son las que determinaran los objetivos a los que debemos alcanzar al concluir la investigación, evidentemente debe de ser un problema que sea relevante, con impacto contundente y de esa manera los resultados sean productivos, en sentido traerían consigo nuevos conocimiento y mejora para el sistema de justicia de nuestro país que tanto lo necesita.

Problema general

¿Cómo afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016?

Problema Específico 1

¿Cuál es la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato el distrito judicial de Lima Norte?

Problema Específico 2

¿Cómo la facultad discrecional del juez influye en la aplicación del segundo párrafo de la Responsabilidad Restringida por edad en la determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte?

Justificación del estudio

Salinas (s/f) que la justificación es la necesidad que la problemática genera, su impacto viene a ser la razón de la investigación, el sustento de su desarrollo. Lo cual

nos dice que debe existir una razón lógica que resulte productiva en conocimiento y practica para solucionar un conflicto. (p46)

Lo que se puede colegir del párrafo anterior es que la justificación de un problema de investigación es la motivación de porque o para que se está realizando y a la repercusión que va tener. Y la importancia de la vigencia de este artículo es de suma importancia por ello elegí y busco encontrarle una solución.

Hernández (2015) sostiene que tanto los objetivos estén vinculados con las preguntas de la investigación, va ser el medio que nos va ayudar a justificar “el para qué” del estudio y así llevarnos a cuáles son los beneficios que puedan derivar del resultado.

Por ello la aplicación del artículo en cuestión, genera aporte tanto en ámbito social, cultura o político, abarca una amplia gama de sectores y ámbitos, el resultado de la presente investigación va generar grandes aportes a esos ámbitos y sectores.

Justificación Teórica

La Justificación Teórica se refiere a un estudio con el propósito de cuestionar y generar un debate de un conocimiento existente con el fin de alcanzar una posible solución.

Por ello frente a la ola de delincuencia en nuestra sociedad y la inseguridad en la que vivimos, no nos podemos dar el lujo de aplicar el artículo 22 de la Responsabilidad Restringida por Edad, porque su aplicación no es proporcional a la realidad actual y menos que se aplica bajo una edad cronológica dejando desprotegida a la sociedad.

Justificación Metodológica

En la justificación metodológica podemos colegir que esta justificación se da por la existencia de nuevos conocimientos los cuales son válidos para generar la investigación y esta sea observada durante el desarrollo de la misma.

Por lo que referente a nuestra investigación tenemos sustento para ello, ya que en el tiempo que se promulgo la realidad era otra y la edad para mayoría de edad era distinta a la actual y bajo esa premisa se observa que en la constitución nos indica que a los 18 años alcanzas la mayoría de edad, eres ciudadano por lo cual te convierte en un sujeto de derecho y obligaciones, pero porque en la materia penal se genera una diferenciación respecto a tomarlo como que aún se encuentra en transición de madurez y no deba ser juzgado como adulto, somos conscientes que todo ha cambiado, el mundo ha evolucionado y el hombre también por lo que la norma debe estar acorde a la actualidad y no quedarse en lo que era cuando fue promulgada, debido que todo es un constante cambio en todos los aspectos, políticos y sociales, siendo el sistema de justicia uno de ellos que también se encuentra en cambios y estos deben ser efectivos.

Justificación Práctica

La justificación practica es cuando la investigación va contribuir con posibles soluciones para el problema, para este tipo de justificación aplica en un sector, es decir que la investigación contribuya al mejoramiento de dicho sector, que solucione el problema de este. (Hernández, 2009, p.4)

Por ello mi investigación se enfoca en el la Corte Superior Judicial de Lima Norte para analizarlo y sustentar el impacto que genera además de mencionar el tipo de casos que se realiza en la misma. Además que la implementación respecto al debido proceso ya es casi una realidad, poco a poco se va posicionando y con mi investigación busco contribuir con mi sector en el que laboro y resido, para que este surja y no sea perjudicado por la aplicación del artículo en el proceso inmediato.

Al artículo en cuestión está vigente en el código penal, el artículo 22°, por el cual bajo la motivación de solo encontrarse en un lapso de edad establecido de 18 a 21 años o mayores a los 65 años, se le otorgue una reducción prudencial de su pena, solo por contar con la en la edad, mediante la cual manifiestan que el agente se encontraría en una transición de madurez en la cual sus acciones no deben tener

consecuencias como los demás y por tanto no ser considerados adultos. (Código Penal, 2004, Artº 22)

Pero lo que cabe señalar, que no se está hablando de menores de edad, sino de ya reconocidos por la constitución como ciudadanos, es decir mayores de 18 años, edad de la cual ya adquirió una gama amplia de derechos y obligaciones, como tal una obligación es asumir su responsabilidad ante una situación penal, siendo la misma a la que se exponen cuando se vulnera un derecho. No hay una base lo suficientemente sustancial para justificar que este se vea beneficiado con tal reducción prudencial solo por presentar la edad cronológica, siendo la madurez algo relativo, debido que la edad puede ser referencial más no determinante para saber si hay ausencia de madurez o plena madurez.

Objetivos

Los objetivos son las metas, a lo que se quiere llegar, los cuales pueden variar mientras se va desarrollando la investigación, toda investigación tiene fijado objetivos que alcanzar, y para ello se ve orientado por la investigación que se realiza. (Bernal (s/f) p.93)

Objetivo general

Analizar cómo afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016.

Objetivo específicos 1

Identificar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte.

Objetivo específicos 2

Determinar como la facultad discrecional del juez influye en la aplicación del segundo párrafo de la Responsabilidad Restringida por edad en la determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte

Supuestos jurídicos

Para entender el concepto tenemos a Hernández, Fernández y Baptista quienes sostienen que las hipótesis son las guías de una investigación, por tanto indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, asimismo indica que son respuestas provisionales a las preguntas de investigación (2014, p. 104).

Es por ello que en la investigación he cumplido planeado mis supuestos vinculados a mis objetivos del presente trabajo.

Supuesto jurídicos general

La aplicación de la Responsabilidad Restringida genera un beneficio adicional al sujeto activo, pero posible perjuicio a la sociedad, abriendo la posibilidad de exponer a todos los que formamos de ciudadanos ante la gran coyuntura de inseguridad en la que vivimos.

De tal manera que se ve beneficiado el sujeto activo y varios de ellos no la merecen por no calzar en el supuesto de transición de madurez ya que esta no se sustenta bajo ningún examen o medio que lo acredite.

Supuestos jurídicos específicos 1

La importancia es que a la hora de identificar la pena esta sea debidamente motivada de acuerdo al hecho delictivo, y no ser sustentada por solo presentar la edad cronológica sin ningún mayor alcance.

Por qué de tal manera se envía un mensaje general que tiene una excusa para salir bien librados si cometen un delito, pero están dentro de las edades establecidas para beneficiarse, y evidentemente ese no es lo que se busca. Debiendo tener más cuidado siendo el Hurto agravado un delito tan común en el distrito judicial de Lima Norte, si bien es cierto no es grave pero no por eso se debe dejar de lado porque es uno de los que más nos afecta.

Supuestos jurídicos específicos 2

El juez tiene la facultad discrecional de determinar la pena empleando los criterios que este crea conveniente, dependiendo del caso que se presente, además de la contribución que genera el proceso inmediato.

II. MÉTODO

2.1. Tipo de investigación

Chacón (2012) sostiene que en una investigación de tipo básica la cual también la llaman pura o fundamental la cual genera conocimiento nuevo abre paso a ampliación de conocimiento y así modificar algún conflicto que exista. (p.6)

Por lo cual, mi investigación calza con la básica porque se van adquirir nuevo conocimiento porque está dirigida a orientada a ello y encontrar información relevante para futuras investigaciones.

Ahora bien respecto al enfoque tenemos a Hernández, Fernández y Baptista, quienes sostienen que la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, siendo el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean (2014, p. 502).

El enfoque de la investigación

Entonces, definiría a mi investigación con el enfoque Cualitativo porque se está analizando constantemente mientras se desarrolla la investigación, es decir, se va recolectando y analizando consecuentemente.

Alcance de Investigación

Su alcance es Explicativo ya que se dirige a una comprensión de un conflicto o fenómeno. Además, que quien realiza este tipo de investigación debe tener buen análisis, síntesis e interpretación.

2.2 Diseño de Investigación

Según sostiene Hernández (2015) que el termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (p.128).

La siguiente investigación presenta el diseño de investigación Fundamentada, la cual se hace efectiva debido a que trata de la investigación que mientras se va recaudando datos, estos van siendo examinados, de manera que así, estas se seleccionen para luego ser analizadas, lo recaudado, en el trayecto de la investigación

Glaser (1992) nos dice que la teoría fundamentada para investigaciones que conciernen temas relacionados como la conducta humana en diferentes ámbitos tales como organizaciones o grupos sociales, esta teoría es muy útil.

Además que (Hernández, 2015, p.355) sostiene que el diseño de teoría fundamentada no se basa en una hipótesis sino que genera supuestos, donde el estudio se basa en una pregunta en general y este se apoya en todo el marco teórico para dar respuesta al problema que está siendo investigado.

2.3 Caracterización de sujetos

Ya teniendo en cuenta el escenario donde se realizará la investigación ahora como bien sostiene Hernández (2015) señala que “La muestra es un subgrupo de la población, un subconjunto de elementos los cuales pertenece a un conjunto definido en cuanto a sus características los cuales se denomina como población” (p.150)

En mi caso estaríamos hablando de 6 entrevistados, altamente capacitados y conocedores de la materia y con experiencia en el tema. Dentro de la cual tenemos un magistrado, un fiscal, una secretaria judicial, tres especialistas. Todos pertenecientes al distrito judicial de Lima Norte.

SUJETO	PERFIL PROFESIONAL	CARGO ACTUAL	INSTITUCIÓN
MARCO ANTONIO BALTUANO VASQUEZ	FISCAL PENAL	PROVINCIAL TITULAR DEL 14vo FISCALIA PRONCIAL PENAL	DISTRITO FISCAL DE LIMA NORTE
MARÍA ROSA TAPIA CASTAÑEDA	ABOGADA	ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO PENAL	CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE
OSCAR ALFREDO CRISOSTOMO SALVATIERRA	MAGISTRADO PENALISTA	JUEZ DEL 1er JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA	CORTE SUPERIOR DE LIMA NORTE
SHERLY ELIZABETH PINAUD HERRERA	ABOGADA PENALISTA	ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL	CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
YDA PAOLA PACHECO PORTAL	ABOGADA	ABOGADA EN EL AREA DE PROCURADURIA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO

2.4 Población y muestra

Respecto al escenario de estudio estamos haciendo referencia sobre qué lugar se va investigar, como sostiene Sicilia y Delgado (2002) que es el espacio físico, accesible, en el que se está dando la realidad que es la base al proyecto de investigación, englobando las acciones y donde quien va investigar va a permanecer por el periodo que dure el proyecto. (p.79)

En cuanto a mi investigación el escenario es la Corte Superior de Lima Norte, específicamente en El pool del nuevo código procesal Penal.

2.5 Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad

Según Moreno (2000) sostiene que para analizar el comportamiento y el vínculo con mi problemática se tiene que apoyar o descartar mis supuestos en base a las técnicas e instrumentos que utilice los cuales deben ser adecuados al diseño de mi investigación y que estos sean de alta validez y confiabilidad. (p.35)

Entrevista

Mi presente investigación presentará como instrumento la guía de entrevista y mi técnica será la entrevista la cual está dirigida, personas idóneos para mi investigación, contando con la materia que he consignado, está dirigida al ámbito penal y también abarca la materia constitucional elegiré a personas de acuerdo a su conocimiento y experiencia ya que ambas serán de suma importancia y relevancia para el aporte a la solución de mi problemática, la cual formará parte también de mi otro análisis.

Utilizare un cuestionario con 10 preguntas en base de la aplicación de la Responsabilidad Restringida por edad los cuales están divididas entre, magistrados, fiscales y especialistas..

Análisis Jurisprudencial

El análisis será de la consulta sobre la sentencia del expediente N° 1618-2016 de Lima Norte la cual fue elevada a consulta a la sala de Derecho constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la Republica.

Validez de los instrumentos: esta se realizó a través de juicio de expertos, los cuales evaluaron cada uno de los Ítems presentados, la matriz y el cuestionario de preguntas.

Confiabilidad: la confiabilidad de los instrumentos se respalda en su originalidad en su elaboración y la respectiva aprobación de la ficha de validación de los instrumentos sometidos a juicio de expertos.

2.6 Método de análisis de Datos

El método es la estrategia que se plantea en el trabajo para desarrollarlo en base a los datos de análisis, por lo cual la presente investigación calza en el método deductivo que vendría ser la investigación que va de lo general a lo particular, debido ello, cumple con mi presente investigación que va de la teoría a la experiencia.

Por lo tanto, habiendo concluido con el análisis de datos llegaremos a la posición de haber obtenido diversas posturas y perspectivas acerca de la problemática de mi investigación y referente a los objetivos fijados, lograremos contrastar para comprobar los supuestos jurídicos.

2.7 Aspectos éticos

La presente investigación mantendrá y respetará los derechos de autor, en la medida que toda fuente será mencionada de manera correcta siendo referencial con el nombre de autor, el año de su publicación y con el número de página concordante a la información citada. Además, la investigación se fundamentará con información recaudada a través de los instrumentos y técnicas de recolección de datos, (entrevista - guía de entrevista – Jurisprudencia) ; se tomó en cuenta las pautas del citado de acuerdo al manual APA y al Reglamento de investigación de la Universidad Cesar Vallejo.

De igual manera se protegió la identidad de las personas que han contribuido con la investigación que tiene fines meramente académicos, manteniendo intacto el principio de la Reserva de identidad.

III. RESULTADOS

3.1. Análisis e interpretación de resultados

Los resultados obtenidos de las entrevistas respecto del Objetivo General, el mismo que responde a Identificar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016, son los siguientes:

Respecto a la pregunta #1 encontramos que

Crisostomo, Tapia, Salazar, Pacheco y Pinaud (2017) sostienen que no se debería tomar solo la edad cronológica en consideración para su aplicación ya que debido a la inseguridad ciudadana que afronta la sociedad estos se ven expuestos por lo que este artículo debería tener una motivación materializada más allá de una presunción por contar con una edad cronológica, por tanto los entrevistados ya mencionados, propusieron que se sustente con una pericia psicológica e inclusive Pinaud (2017) enfatizo que si no había una solución pues debería derogarse por crear un perjuicio su vigencia.

Sin embargo, Baltuano (2017) sostienen que si bien nos encontramos afrontando una situación complicada frente la inseguridad esta responsabilidad restringida está dirigida respecto a que según en materia penal a los 21 recién se cuenta con pleno discernimiento y por eso se toma la medida restringida, pero sin perjuicio a ello, algo que él considera válido para la tranquilidad de la sociedad es que exija una pericia psicológica para contar con mejor sustento.

Respecto a la pregunta #2 encontramos que

Tapia, Pacheco, Salazar y Pinaud (2017) sostienen que de cierta manera si estamos bajo un sistema garantista pero que el conflicto este tal vez más por el lado de la aplicación del mismo, por lo que consideran que si se debería renovar la posición corrigiendo algunos aspectos.

Sin embargo Crisostomo y Baltuano (2017) sostienen una posición más tajante debida a que el sistema que se maneja en el Perú es meramente garantista ya que las normas están dirigidas a ese sistema, por lo haciendo un análisis, se ha podido llegar a que los resultados de esta modalidad no son tan positivos como deberían por cual consideran que si debería realizar una renovación con modificaciones para que sean beneficiosas para la justicia en el Perú.

Respecto a la pregunta #3 encontramos que

Salazar, Crisostomo, Pinaud (2017) sostienen sobre que referente a la edad que dista en la constitución es de 18 es correcta, sin embargo, en la responsabilidad Penal no se maneja con el mismo criterio por ciertas normas que están en vigencia, los entrevistados sostienen que mientras esas normas existen, se deben respetar. En especial Baltuano (2017) sostiene con énfasis que existen varias normas inconstitucionales por lo tanto, considera que se deben observar esas normas y deben de tener un sustento firme para que sigan en vigencia y sean de gran utilidad.

Sin embargo, Pacheco y Tapia (2017) sostienen que se debería exigir una aclaración en cuanto a la edad que se debe asumir la responsabilidad tanto como civil y penal. Ya que ambas están relacionadas de alguna manera, por lo tanto, sugieren que se deberían de analizar y definir para evitar interpretaciones erróneas. Deben guiarse por una sola línea ambas.

Respecto a la pregunta #4 encontramos que

Todos los entrevistados coincidieron que se debería de exigir una prueba psicológica o la pericia que sea conveniente para que dicho artículo este sustentado de manera fehaciente y su aplicación no se encuentre en esta controversia creando así desconcierto en la sociedad.

De otro lado los entrevistados respecto del Objetivo Específico I el mismo que responde Determinar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida

por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte han manifestado:

Respecto a la pregunta #5 encontramos que

Tapia, Pinaud, Batualno, Pacheco y Salazar (2017) sostienen que respecto al hurto agravado todos coinciden que es uno de los casos más comunes que les ha tocado ver en el proceso inmediato. Ya que Lima Norte es un distrito donde lamentablemente sufre del mal de la inseguridad de manera muy fuerte, pero dentro de esos casos no son muchos los que se encuentren dentro de las edades de 18 a 21 años, pero a esos pocos si se les aplico la responsabilidad restringida.

Sin embargo Crisóstomo (2017) sostiene que él por ser magistrado ha tenido mayor contacto y experiencia respecto a los casos de hurto agravado en el proceso inmediato, ha tenido pocos pero casos consistentes de imputados dentro del margen de edades de 18 a 21 años de edad, quién tenía una perspectiva distinta a las que tenía el año pasado sobre este artículo, por los pronunciamientos que se han ido dando.

Respecto a la pregunta #6 encontramos que

Salazar, Crisostomo, Pinaud y Pacheco (2017) sostienen que no dirían que es un exceso de beneficios, como ya antes lo mencionaron consideran que debería de existir un examen psicológico para corregir esa posición, sin perjuicio a ello señalaron también que se deberían de analizar los beneficios que se otorgan porque en ese sentido de manera general consideran que hay aspectos que se están escapando y creando vacíos legales que son utilizados en favor de los imputados de manera errónea.

Sin embargo Tapia y Baltuano (2017) sostiene que no es un exceso de beneficios que mientras existan normas que estén en vigencia, estas se deben de cumplir, pero si son conscientes que existen traspiés en sus aplicaciones por cual también

recomiendan que se observen pero mientras no lo hagan, se deben de aplicar por encontrarse en vigencia, ellos lo consideran valido.

Respecto a la pregunta #7 encontramos que

Todos los entrevistados coinciden con que el procedimiento recién implementado, conocido como proceso inmediato, si ha cumplido con su principal objetivo que fue caracterizarse con la celeridad de este proceso, siendo así que ha liberado la carga procesal con lo cual contribuye con puntos suspensivos, pero también deben reconocer que faltan ajustar algunos aspectos los cuales esperan que mientras pase el tiempo estos se solucionen.

Sin embargo Batualdo (2017) sostiene que sin perjuicio a que coincide con los demás entrevistados, él particularmente menciona que se debería de implementar también nuevos juzgado y personal capacitado para afrontar la demanda de delitos en flagrancia que ven porque según su parecer hacía falta.

Sin embargo a ello, cabe mencionar que Crisostomo (2017) sostuvo que el no comparte la opinión del párrafo anterior, el considera que si apenas llegan los casos se estudian y resuelven, no debería generarse carga ni se necesitaría más personal o la apertura de nuevos juzgados.

Los entrevistados respecto del Objetivo Específico 2 Determinar Cómo la facultad discrecional del juez influye en la aplicación del segundo párrafo de la Responsabilidad Restringida por edad en la determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte han manifestado:

Respecto a la pregunta #8 encontramos que

Salazar, Pinaud, Pacheco y Tapia (2017) sostienen que no se vulnera el principio de igualdad por lo que consideran que se está aplicando una errónea interpretación, quienes si aplican responsabilidad restringida por edad deberían de reconsiderarlo y a quien corresponda pronunciar y esclarecerlo.

Sin embargo Baltuano (2017) sostiene que existe una gran cantidad de artículos inconstitucionales en nuestro ordenamiento jurídico y a pocos de ellos se les aplica el control difuso.

Sin embargo Crisóstomo (2017) sostiene que él aplicó dicho control difuso en un caso de robo agravado, estando dicho delito dentro de lo que excluye su aplicación, el mismo que fue elevado a sala para consultar su fallo de sentencia.

Respecto a la pregunta #9 encontramos que

Todos los entrevistados coinciden que no debe y no puede existir una norma que le diga que artículo puede o no aplicar, es una falta de respeto a su experiencia y sus grados académicos. Tampoco está bien que se dicte una norma dejando a libre facultad si el juez quiere o no aplicarlo de creerlo conveniente por lo que Baltuano y Crisóstomo (2017) sostuvieron que debería esclarecerse ese punto con una decisión firme.

Respecto a la pregunta #10 encontramos que

Crisostomo, Salazar, Tapia, Pinaud y Pacheco (2007) sostienen que la implementación del proceso inmediato si esta regenerando grandes aportes al sistema d justicia, en particular al de Lima norte, más aún porque recién se viene implementando y ya cuando se consolide este podrá mejorar algunos aspectos que le faltan corregir pero en términos generales si contribuyen con el sistema de justicia.

Sin embargo Baltano (2017) sostiene que si bien es cierto que se está liberando la carga procesal y otros aspectos positivos del nuevo proceso, también considera que se debe tener cuidado, ya que por la celeridad se puedan apresurar algunas partes del proceso que deban su tiempo, sin desmerecer ellos considera que levantando esas observaciones, con el tiempo se acomodara y tendrá grandes resultados.

3.2. Descripción de resultados de la Técnica análisis jurisprudencial

El documento a continuación analizado respecto del objetivo específico II Determinar cómo la facultad discrecional del juez influye en la aplicación del segundo párrafo de la Responsabilidad Restringida por edad en la determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte brinda los siguientes resultados:

La sala de Derecho Constitucional Social Permanente de la Corte Suprema, es conforme a lo previsto en el artículo 200º de la constitución política, es el órgano competente para absolver consultas por la aplicación del control difuso por parte de los jueces. Es por ello que realiza este pronunciamiento debido a que se aplicó el control difuso en el segundo parrado del artículo 22 del código penal en el delito de Robo Agravado en grado de tentativa, por lo cual en su sentencia se pudo reducir prudencialmente la pena. Por tanto esta Sala va esclarecer las reglas a seguir para aplicar un correcto y debido control difuso, por lo cual se va exponer lo siguiente:

El Perú es un estado Constitucional de Derecho por lo que se puede entender que en nuestro sistema jurídico prevalece el ordenamiento constitucional, en rango de jerarquía el derecho constitucional tiene supremacía como bien está establecido en el artículo 51º de la constitución política. Por tanto, si mantenemos esa posición podemos colegir que una de las funciones de los jueces va ser la de preservar a la hora de resolver casos, siendo más específicos a la hora de sentenciar, son ellos los encargado a realizar una debida revisión y análisis de las leyes por si estas podrían atentar con la constitución por lo cual tendrían la potestad de aplicar control difuso solo si este fuese necesario. Lo mencionado se encuentra establecido en el artículo 138º de la constitución política del Perú, en su segundo párrafo que dice que de encontrarse en el proceso una incompatibilidad en una norma constitucional frente a una norma legar, evidentemente la media a optar por los jueces es la de prevalecer la primera. Indicando que su aplicación esta para fines estrictos de índole constitucional siendo esta de carácter excepcional y de ultima ratio.

Debido a la importancia de su aplicación, para los jueces quienes son los competentes ya que es complejo su análisis pero son ellos los más calificados para realizar una observación de la situación y producir una sentencia, la cual deba estar con una motivación contundente para sustentar la misma. Ya que el orden de análisis empieza por la identificación de los derechos que están involucrados, la intervención y su intensidad, la aplicación del test de ponderación, los cuales tan necesariamente vinculados a los datos y particularidades del caso.

Entonces, debido a la complejidad que existe a la hora del análisis para la aplicación del control difuso, es que la Sala emite unas 4 reglas que van a orientar a los jueces al momento de efectuar el control difuso:

Partiendo por lo establecido según el artículo 109° y el artículo 108° de la constitución política, el juez empieza por el reconocimiento de presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de la norma.

Luego, el juez deberá realizar un análisis de la relevancia por lo que deberá de verificar si la norma en controversia resulta aplicable de modo que determine si aporta la solución prevista para resolver el caso en concreto.

Acto seguido el juez debe realizar un análisis exhaustivo de interpretación para determinar si la norma es compatible o incompatible con la constitución. Ya que el competencia de los jueces agotar toda vía para llegar al control difuso ya que esta es una medida de ultima ratio, debido a que su aplicación sin este análisis exhaustivo se estaría trayendo consigo la inseguridad jurídica y así vulnerando el orden jerárquico del sistema normativo.

Por ultimo pero no menos importante es resaltar la identificación de los derechos fundamentales que se encuentran en controversia aplicando el test de proporcionalidad.

Teniendo ya en cuenta todo lo mencionado en párrafos anteriores, nos centraremos en el caso específico y motivo de la consulta. En el cual encontramos que sobre la presunción de su constitucionalidad, validez y legitimidad, norma que es conforma al

decreto legislativo N° 635 publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 4 de agosto de 1991, el cual por encontrarse en vigencia es legítimo. Dentro del proceso de interpretación se llega a la conclusión que el artículo en todo su extremo no indica que siempre se llegara a la reducción prudencial de la pena mínima legal, debido a que no la señala como obligatoria, con lo cual exige al juez que a evalué y determine una decisión debidamente motivada frente al caso que lo haga, frente a las restricciones solo señala en su primer párrafo a la reincidencia y en su segundo párrafo excluye a los delitos graves para su aplicación de reducción prudencial.

De modo que la norma en controversia, en sí no es una norma universal e igualitaria porque está establecida como una posibilidad por lo cual no se debería aplicar a todos los agentes con imputabilidad restringida, dicho esto su aplicación dependerá de las particularidades y el análisis del caso por parte del juez que traerá consigo una decisión debidamente motivada. Llegando al principio de igualdad el cual está protegido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en los artículos 1 y 7 que establecen que todos los seres nacen libres y con igualdad en dignidad que todos son iguales ante la ley, que tienen protección de la ley y contra todo acto de discriminación.

Partiremos de la premisa de igualdad frente al marco teórico del derecho internacional de los derechos humanos, la igualdad como prohibición de discriminación e igualdad ante la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que si existen criterios razonables y objetivos que sustenten un trato diferenciado, estos no serían considerados como una discriminación como aseguran algunos según sus criterios. (OC-4/84 del 19 de enero de 1984, p55 y p57)

Concluyendo que no hay afectación en el principio de igualdad, ya que se aplican desigualdades objetivas por la misma desigualdad de los hechos es decir de los delitos, no existiendo ni discriminación y diferenciación ante la ley. De modo que carece de fundamentos y motivaciones para ejercer el control difuso en este caso de robo agravado, contraviniendo así con los fines constitucionales.

Jurisprudencia

La jurisprudencia utilizada por esta sala están constituidas en el segundo tema del Primer Pleno Jurisdiccional en Materia Constitucional y Contencioso Administrativo el mismo que fue aprobado por resolución administrativa N° 4402015-P-PJ el día 13 de noviembre de 2015. Referente al carácter vinculante que se tiene con la doctrina jurisprudencial conforme al artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial el que fue publicado el 2 de febrero de 2016.

I Pleno en Materia Constitucional y Contencioso Administrativo, Segundo Tema de acuerdo al Ejercicio Jurisdiccional del control difuso en autos y Sentencias, cumpliendo los jueces con observar criterios, relevancia, presunción e interpretación para aplicarla sin generar un perjuicio a su fin constitucional.

Conclusión final del documento analizado tenemos que:

Como se ha podido apreciar en el desarrollo de la consulta del expediente 1618-2016 la Sala Constitucional y Social Permanente ha determinado lo siguiente: Que la sentencia emitida en la resolución número cinco de fecha uno de enero de dos mil dieciséis por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, ha sido desaprobada por no haberse encontrado vulneración del principio de igualdad y por tanto, no cumplir con los estándares para hacer uso correcto del control difuso.

En esa posición la Sala tiene el poder de Aprobar o Desaprobar dicha sentencia, por lo que ha sido declarada, DESAPROBADA, por ende esa sentencia es NULA y de este modo el Juez que la emitió tendrá que emitir un nuevo pronunciamiento contando esta vez con los puntos que la sala ha sacado a relucir en la presente resolución para que de ese modo su nuevo pronunciamiento sea bien motivado sobre el análisis correcto y no causar un perjuicio a las partes, a la sociedad y tampoco al sistema judicial.

IV. DISCUCIÓN

En la presente investigación se analizó respecto a los derechos y beneficios del imputado frente y beneficios frente a los de la sociedad, el impacto que causan y si estos son o no necesarios, pueden ser perjudiciales. Además de que su aplicación este basado en un sustento mayor como el de una pericia psicológica.

A continuación se planteará las posiciones que en el desarrollo de la investigación hemos podido encontrar frente a los sujetos que han sido entrevistados con los conocimientos y experiencia que los respalda.

Respecto del Objetivo General, el mismo que responde a Identificar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016, son los siguientes:

Respecto a la pregunta #1 Qué opinión le merece la vigencia del artículo 22 del código penal del Perú frente a la inseguridad ciudadana, siendo un beneficio que se sustenta bajo un supuesto de madurez.

Tenemos que en el Proyecto de Ley N° 2153/2012-CR en donde se sustenta su posición mediante los aspectos como el desarrollo científico, cultural y económico, la tecnología es un factor bastante influyente debido a que tales avances generan unos conocimientos que sorprende la manera en que se dan los cambios. En cuanto a ello, LEÓN (2013) sostuvo que frente a una posición de reducción amparada en un sustento, esa se aplicó cuando se manejaba la edad de 21 años para obtener la mayoría y que actualmente la realidad es ajena a la que hace mención no se debería de seguir aplicando por lo que conlleva y el perjuicio que ocasiona.

Salazar (2013) respecto al proyecto de ley 177/2011-CR sustento su posición con el fin de contribuir de manera positiva con el problema de la inseguridad ciudadana y en la sesión, por lo cual en la figura que el plantea no se puede aceptar tener en vigencia al artículo 22 por ser este manejado sobre un supuesto de madurez que se maneja en materia Penal.

En cuanto los entrevistado coinciden con él, tanto Crisóstomo, Tapia, Salazar, Pacheco y Pinaud (2017) sostienen que no se debería tomar solo la edad cronológica en consideración para su aplicación haciendo referencia también a la preocupación del congresista que en su proyecto de ley respecto a la inseguridad ciudadana que afronta la sociedad estos se ven expuestos por lo que este artículo debería tener una motivación materializada más allá de una presunción además de mencionar que Pinaud (2017) fue clara y tajante que si no había una solución a ello, se debería derogar dicho artículo por crear un perjuicio al sistema con su vigencia.

La Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso (2013) presento información nueva y como es que el cambio de paradigmas culturales genera una transición en el hombre, en distintos aspectos. Es decir, la evolución psicobiosocial el ser humano podría asumir responsabilidad penal incluso antes de los 18 años. Si bien la neurociencia advierte que el cerebro humano no está totalmente maduro hasta que superamos los 30 años e incluso no alcanza su plenitud hasta cumplir los 40 años tal atingencia refuerza la posición de dejar sin efecto el artículo 22, debido a ello tendríamos una restricción hasta los 40.

De esta manera Baltuano (2017) concuerda con la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso y que sostiene una posición más específica respecto a que la solución sería que se sustente con un medio probatorio para probar si se encuentra o no en una transición y por ende se le atribuya el beneficio de ser el caso.

Y es que claramente en la época que atravesamos todos, como el congresista, los entrevistados y sus familias, somos parte de la sociedad por ende nuestra preocupación es tal que concluimos que si su vigencia va ser bajo ese sustento, carecería de motivación por lo cual debería derogarse.

Respecto a la pregunta #2 ¿Considera usted que el sistema de justicia peruano debería apostar por una renovada posición y no ser tan benevolente con el agente activo?

NEYRA (2012) sostiene que en la búsqueda de un sistema procesal vinculado a garantías del debido proceso sea para ambas partes y a su vez resulte eficaz. Como bien lo plantea el sistema garantista y por ello su vigencia en nuestro país.

Existe concordancia con lo sostenido por Tapia, Pacheco, Salazar y Pinaud (2017) que el sistema peruano es garantista pero que el posible conflicto que trae ciertos aportes no tan positivos es por el lado de su aplicación, por lo que consideran que si se debería renovar la posición corrigiendo algunos aspectos para evitar futuros conflictos o deficiencias. Frente a esto tenemos que Crisostomo y Baltuano (2017) sostienen una posición más tajante, en mérito de su labor y trayectoria afirman que el sistema que se viene aplicando en el Perú es meramente garantista ya que las normas están dirigidas a ese sistema, por lo que haciendo un análisis, se ha podido llegar a que los resultados de esta modalidad no son tan positivos como deberían por lo cual consideran que si debería realizar una observación y merecerlo una renovación con modificaciones para que sean beneficiosas para la justicia en el Perú.

Concordando con el magistrado y el fiscal, en efecto el Perú se encuentra bajo el manto de un sistema garantista, el cual se desarrolló en la mayoría del mundo, sin embargo, en nuestro país se carece de ciertos criterios a la hora de su aplicación por ende propongo que el sistema garantista se mantenga ya que el fin es garantizar los derechos fundamentales, pero observando que a veces no cumple esa función a plenitud, se deba refrescar con algunos parámetros para que su aplicación sea la correcta.

Respecto a la pregunta #3 ¿Qué opinión le merece que en nuestra constitución sostenga y reconozca a un ciudadano a la edad de 18 y según el código penal sostenga otra posición?

Burgos (2002) en su investigación de tesis “El Proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad”, refiere respecto a que toda materia respecto al ordenamiento jurídico se tiene necesaria y fuertemente relación con la constitución. Siendo la materia penal la que tiene un vínculo más intenso. Esto se debe a que en materia penal se tocan restricciones sobre libertades y derechos fundamentales de las personas que son juzgadas y también de quién fue víctima, siendo justamente los dos importantes puntos que podemos apreciar en la constitución por lo que pueden generarse restricciones.

Contraponiéndose a dicha posición tenemos a Salazar, Crisostomo, Pinaud (2017) sostienen sobre que referente a la edad que dista en la constitución es de 18 es correcta, sin embargo, en la responsabilidad Penal no se maneja con el mismo criterio por ciertas normas que están en vigencia, los entrevistados sostienen que mientras esas normas existen, se deben respetar.

En especial Baltuano (2017) quien sostiene con mayor énfasis que existen varias normas inconstitucionales pero que mientras estas sigan en vigencia se deben cumplir sin perjuicio a ello, por su labor como fiscal si considera que se deben observar esas normas y deben de tener un sustento firme para que sigan en vigencia y sean de gran utilidad pero hasta que no se generen esas aclaraciones, las que están deban cumplirse.

Y llegamos a la posición que Pacheco y Tapia (2017) sostienen la cual ellas proponen que se debería exigir una aclaración en cuanto a la edad que se debe asumir la responsabilidad siendo esta aplicada tanto como civil y penal. Ya que ambas están relacionadas de alguna manera, por lo tanto, sugieren que se deberían de analizar y definir para evitar interpretaciones erróneas. Deben guiarse por una sola línea ambas. Por lo que expresan ambas especialistas y en relación a Burgos, coincido con ellos que presentan ideas más claras y posibles soluciones.

Respecto a la pregunta #4 ¿Considera usted que se debería sustentar con un examen psicológico la aplicación de la restricción por edad para demostrar la supuesta falta de discernimiento?

Ucha (2009) sostiene que el test psicológico, también conocido como una prueba psicológica, mediante el cual se utiliza para evaluar una gama de características de la psicológica, pueden ser salud mental o aquellos rasgos esenciales y generales que delimitan y hacen distinción de la personalidad de una persona o en qué estado se encuentra esta.

Por ellos la prueba psicológica se suscita para diferentes fines y dentro del derecho, considero es muy relevante su presencia. Por lo que todos los entrevistados coincidieron que se debería de exigir una prueba psicológica o la pericia que sea conveniente para que dicho artículo este sustentado de manera fehaciente y su aplicación no se encuentre en esta controversia creando así desconcierto en la sociedad.

De otro lado los entrevistados respecto del Objetivo Específico I el mismo que responde Determinar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte han manifestado:

Respecto a la pregunta #5 ¿Qué opinión le merece respecto al delito de hurto agravado sea considerado el tercer más frecuente en lima norte?

INEI (2016) mediante su informe en el periodo octubre 2015 – marzo 2016, el 32,5% de la población de 15 y más años de edad fue víctima de un hecho delictivo; de los que podemos señalar lo siguiente el 45,7% sufrió el robo, 16,8% intento de robo, lo que quiere decir que, un aproximado de 90 personas de cada 100 habitantes de 15 y más años de edad cree que será víctima de un hecho delictivo.

Recuperado de: <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/inei-presento-el-sistema-integrado-de-estadisticas-de-criminalidad-y-seguridad-ciudadana-9236/>

Pacheco, Pinaud, Batualno y Salazar (2017) sostienen que respecto al hurto agravado todos coinciden que es uno de los casos más comunes que les ha tocado ver en el proceso inmediato. Ya que Lima Norte es un distrito donde lamentablemente sufre del mal de la inseguridad de manera muy fuerte, pero dentro de esos casos no son muchos los que se encuentren dentro de las edades de 18 a 21 años, pero a esos pocos si se les aplicado la responsabilidad restringida.

Sin embargo Crisóstomo (2017) sostiene que él por ser magistrado ha tenido mayor contacto y experiencia respecto a los casos de hurto agravado en el proceso inmediato, ha tenido pocos pero casos consistentes de imputados dentro del margen de edades de 18 a 21 años de edad, quién tenía una perspectiva distinta a las que tenía el año pasado sobre este artículo, por los pronunciamientos que se han ido dando.

Respecto a la pregunta #6 ¿En su opinión no es un exceso de beneficios que en el proceso inmediato ya contando la terminación anticipada, además se aplique la responsabilidad restringida por edad?

San Martín Castro (2006) nos dice que toda víctima de un hecho delictivo tiene como derecho fundamental acceder a un proceso y obtener justicia de modo que se alcance una respuesta adecuada de parte de la justicia, la cual sea eficaz a su pretensión.

Salazar, Crisóstomo, Pinaud y Pacheco (2017) sostienen que no dirían que es un exceso de beneficios, como ya antes lo mencionaron consideran que debería de existir un examen psicológico para corregir esa posición, sin perjuicio a ello señalaron también que se deberían de analizar los beneficios que se otorgan porque en ese sentido de manera general consideran que hay aspectos que se están

escapando y creando vacíos legales que son utilizados en favor de los imputados de manera errónea.

Sin embargo Tapia y Baltuano (2017) sostiene que no es un exceso de beneficios que mientras existan normas que estén en vigencia, estas se deben de cumplir, pero si son conscientes que existen traspiés en sus aplicaciones por cual también recomiendan que se observen pero mientras no lo hagan, se deben de aplicar por encontrarse en vigencia, ellos lo consideran valido.

Concuerdo con San Martín Castro al hacer mención de la importancia que tiene la victima ya que es una representación de la sociedad, hoy le toco a esa persona pero si no se aplica a justicia de manera adecuada pues mañana podría ser cualquiera. Lo que considero es que no se debe descuidar los derechos del imputado pero tampoco premiarlo con un beneficio más al de la terminación anticipada.

Respecto a la pregunta #7 Considera usted que el proceso inmediato a liberado una cantidad considerable de la carga procesal

Todos los entrevistados coinciden con que el procedimiento recién implementado, conocido como proceso inmediato, si ha cumplido con su principal objetivo que fue caracterizarse con la celeridad de este proceso, siendo así que ha liberado la carga procesal con lo cual contribuye con puntos suspensivos, pero también deben reconocer que faltan ajustar algunos aspectos los cuales esperan que mientras pase el tiempo estos se solucionen.

Sin embargo Batualdo (2017) sostiene que sin perjuicio a que coincide con los demás entrevistados, él particularmente menciona que se debería de implementar también nuevos juzgado y personal capacitado para afrontar la demanda de delitos en flagrancia que ven porque según su parecer hacía falta.

Sin embargo a ello, cabe mencionar que Crisóstomo (2017) sostuvo que el no comparte la opinión del párrafo anterior, el considera que si apenas llegan los casos se estudian y resuelven, no debería generarse carga ni se necesitaría más personal o la apertura de nuevos juzgados.

Concuerdo con los entrevistados respecto a que si se ha liberado carga procesal pero si existen varios puntos que merecen observación y no están referidos a la celeridad propiamente dicha. Además de durante las entrevistas pude observar aquí particularmente la posición del fiscal con el magistrado respecto a la creación de nuevos juzgados o mayor apoyo. Y es que para el Fiscal si se le resulta complejo liberar su carga y para el magistrado no lo es, ya que lo que llega a su manos lo evalúa y busca pronta solución para que la celeridad prime pero en caso del fiscal probablemente no revise e manera oportuna lo que le llega y ahí radica su problema, lo planteando por el magistrado es un punto valido.

Los entrevistados respecto del Objetivo Específico 2 Determinar Cómo la facultad discrecional del juez influye en la aplicación del segundo párrafo de la Responsabilidad Restringida por edad en la determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte han manifestado:

Respecto a la pregunta #8 ¿Cuál es su opinión sobre que el artículo 22 del código penal del Perú excluya a los delitos graves, considera usted que se ve vulnerado el principio de igualdad en la aplicación del artículo en mención?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que si existen criterios razonables y objetivos que sustenten un trato diferenciado, estos no serían considerados como una discriminación. (OC-4/84 del 19 de enero de 1984, p55 y p57)

Salazar, Pinaud, Pacheco y Tapia (2017) sostienen que no se vulnera el principio de igualdad por lo que consideran que se está aplicando una errónea interpretación,

quienes si aplican responsabilidad restringida por edad deberían de reconsiderarlo y a quien corresponda pronunciar y esclarecerlo.

Sin embargo Baltuano (2017) sostiene que existe una gran cantidad de artículos inconstitucionales en nuestro ordenamiento jurídico y a pocos de ellos se les aplica el control difuso.

Aquí existe una particularidad debido a que pude entrevista al juez que emitió la sentencia en consulta que analice sobre el pronunciamiento de la sala, para el cual el magistrado Crisóstomo (2017) sostuvo que él aplico dicho control difuso en un caso de robo agravado, con un criterio eficaz pero sin contar con un pleno que salió posterior a su pronunciamiento y por ser un caso de tentativa fue lo que lo llevo a ello, de modo que la sala se pronunció que no tuvo motivación pertinente por lo cual se tuvo que rectificar con un nuevo pronunciamiento basado en lo establecido en la resolución de la Sala. Cuando el Robo agravado se encuentra en el segundo párrafo para quien no aplica la responsabilidad restringida por edad.

Respecto a la pregunta #9 ¿Considera usted que es correcto que un artículo limite la facultad del juez, se debería esclarecer de manera determinante o basta con solo dejar la aplicación del segundo párrafo en facultad discrecional del juez?

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente (2016) se pronunció respecto al control difuso como una facultad del juez mediante la cual le proponen reglas a cumplir para su aplicación. De la cual podemos partir que las normas están para cumplirse por lo tanto el juez tiene la potestad de que si se encuentran en vigencia y luego de un análisis pertinente decide aplicarlo para llegar a un resultado con la debida motivación, es totalmente valido, caso contrario a ello no puede existir una norma que lo contradiga sin base fundamental que se encuentre en el mismo ordenamiento al que nos regimos.

Por lo que todos los entrevistados coinciden que no debe y no hay razón de que pueda existir una norma que le diga al juez como desenvolverse, es una falta de respeto a su experiencia y sus grados académicos, además que se contrapone al sistema. Respecto a que se dicte una norma dejando a libre facultad si el juez quiere o no aplicarlo tampoco es conveniente por lo que Baltuano y Crisóstomo (2017) sostuvieron que debería esclarecerse ese punto con una decisión firme, mediante la cual sirva para acasos futuros si se mantiene la permanencia de este artículo.

Respecto a la pregunta #10 ¿Considera usted que realmente el proceso inmediato está generando resultados positivos y contribuyendo con el sistema de justicia en el Perú?

Crisostomo, Salazar, Tapia, Pinaud y Pacheco (2007) sostienen que la implementación del proceso inmediato si está regenerando grandes aportes al sistema d justicia, en particular al de Lima norte, más aún porque recién se viene implementando y ya cuando se consolide este podrá mejorar algunos aspectos que le faltan corregir pero en términos generales si contribuyen con el sistema de justicia.

Sin embargo Baltano (2017) sostiene que si bien es cierto que se está liberando la carga procesal y otros aspectos positivos del nuevo proceso, también considera que se debe tener cuidado, ya que por la celeridad se puedan apresurar algunas partes del proceso que deban su tiempo, sin desmerecer ellos considera que levantando esas observaciones, con el tiempo se acomodara y tendrá grandes resultados.

V. CONCLUSIONES

1. Se ha podido demostrar de las grandes deficiencias que contiene el artículo 22 del código penal del Perú por lo que su permanencia está sometida a un supuesto que no tiene correlación alguna con la de nuestra actualidad, trayendo un perjuicio a la sociedad, contribuyendo al riesgo y exposición de todos los que la conformamos. Si la constitución teniendo jerarquía y supremacía sobre toda norma, como se le va contraponer el reconocimiento de la responsabilidad, ya sea esta civil o penal, se debe prevalecer la constitucional, que es la de 18 años.
2. Queda tajantemente claro que no existe tal vulneración ya que dicho principio está enfocado en protección en posible caso de discriminación o desigualdad ante la justicia, pero este no es el caso. Ya que está establecido que si existen diferencias razonables, llámese por la gravedad del delito y es por ello que a este se le excluya, es válido y no se atenta contra el principio de igual. Solo se han generado delimitaciones por cuestión de la gravedad y el alcance que están han generado y contando con el término de “posibilidad” de la reducción de la pena más no señala que sea automática.
3. No puede existir norma que delimite la facultad del juez salvo que este la perjudique y esté debidamente establecida en el ordenamiento, como ejemplo tenemos el control difuso que analizamos, señala que medidas debe tomar para aplicar debidamente el control difuso pero no es que lo limite o perjudique su función propiamente dicha, en este caso lo hace para salvaguardar el derecho constitucional por la cual se rigen todas la normas. En ese caso tiene justificación pero en casos muy aislados no pueden limitar la facultad del juez.

VI. RECOMENDACIONES

1. Se derogue el artículo 22 en su totalidad, por ser un artículo que genera perjuicio en el sistema judicial y expone a la sociedad a un riesgo mayor al que ya está expuesto.
2. En caso persiste en su vigencia se tienen que observar en todos sus extremos y esclarecerse toda la controversia que trae consigo dicho artículo y se exija un examen o pericia psicológica para su aplicación, de modo que se pueda comprobar la motivación que lo respalda sobre la transición de madurez.
3. La mejor manera de contribuir tanto con el sistema de justicia y con la sociedad es la prevención, deberían de promoverse más charlas informativas y concientizaciones, que si bien es cierto ya se vienen dan en algunos casos, pero se debería intensificar, considero que esa es la mejor manera de contrarrestar la inseguridad y a la par la delincuencia.

VII. REFERENCIAS

Referencias Primarias

Entrevistas

Baltuano Vasquez, Marco Antonio – Fiscal

Crisostomo Salvatierra, Oscar Alfredo - Juez

Castañeda Tapia, Maria Rosa – Especialista

Pinaud Herrera Sherly Elizabeth - Especialista

Pacheco Portal Yda Paola - Abogada

Referencias Bibliográficas

BERNAL, C. (s/f). *“Metodología de la investigación, para administración, economía, humanidades y ciencias sociales”*. (2 ed.). Colombia: Pearson.

Bernal, C. (2011). *Metodología de la investigación*. (3.a. ed.). Colombia. Pearson.

Bernardo, C, Encinas, C, Menacho, M (2015) *Metodología de la Investigación Científica*(1.a ed) Lima. Universidad Autónoma del Perú.

Salinas, P. (s/f). *Metodología de la Investigación Científica*. Venezuela.

Hernández, R, Fernández, R, Batista C. (2014). *Metodología de la Investigación*. (6.a. ed.). México: Mc Graw Hill.

Hernández, Fernández y Baptista, *metodología de la investigación*, 4ta edición (2004) p. 104. Recuperado de <https://es.scribd.com/doc/38757804/Metodologia-de-La-Investigacion-Hernandez-Fernandez-Batista-4ta-Edicion>

Chacón Rodríguez, J. (2012). *Técnicas de Investigación Jurídica*. (Material del Curso, Universidad Autónoma de Chihuahua).

(Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernandez-Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 2008). (Hernández, 2015, p.128)

Moreno, G. (2000). Introducción a la metodología de la investigación educativa II. México D.F: Editorial Progreso, S.A. de C.V.

Hernández, R. (2015). Metodología de la Investigación. (6^a ed.). Perú: Recuperado de booksmedicos.org

Referencias secundarias

ANDRÉS, P.”*Justicia penal, derechos y garantías*”. Lima-Bogotá: Palestra Themis. 2007.

ARÉVALO J., “*Circunstancia atenuantes y Agravantes*”. 2012. Recuperado de <http://el-punto-penal.blogspot.pe/2012/07/circunstancias-atenuantes-y-agravantes.html>

VINCENZO MANZINI, “*Tratado de Derecho Procesal Penal*”. Tomo III. Ediciones Jurídicas Europa, Buenos Aires, 1952. p.601

ROSAS, J. “*Manual de Derecho Procesal Penal*”, Editorial Grijley, Lima, 2003. p. 824

SANCHEZ, P. “*Comentarios al Código Procesal Penal*”, Editorial Idemsa, Lima, 2004. p.130.http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.851/pr.851.pdf

CARNELUTTI, Francesco, Lecciones sobre el proceso penal, T. II, traducida por Santiago Sentís Melendo, ediciones jurídicas Europa-América, Bosch, Bs. As., 1950, p. 77.

GONZALES, I “Agravante, Atenuante y Eximente” 2011 recuperado de <https://psicolegalyforense.blogspot.pe/2011/03/agravante-atenuante-eximente.html>

Oré, E. “DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA. REINCIDENCIA Y HABITUALIDAD. A PROPÓSITO DE LAS MODIFICACIONES OPERADAS POR LA LEY 30076.” 2013 Recuperado de: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20131108_03.pdf

IBARRA ESPÍRITUM, Carlos Enrique: “La aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del nuevo proceso penal ¿es la terminación anticipada un criterio de oportunidad? En: revista del instituto de ciencia procesal penal

Acta de la décima séptima sesión ordinaria de la comisión de justicia y derechos humanos, 2013. Recuperado de: [http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/2012actasjusticia/A414758F2E4E4EDE05257BC100540F51/\\$FILE/JUSTICIA_20%C2%B0Ord.11.06.2013.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/2012actasjusticia/A414758F2E4E4EDE05257BC100540F51/$FILE/JUSTICIA_20%C2%B0Ord.11.06.2013.pdf)

Acuerdo Plenario N° 4-2008/CJ-116

GALVEZ VILLEGAS, Tomás A, “*nuevo orden jurídico y jurisprudencia*”. Jurista Editores, Lima. 2012, p. 432,433.

Álvarez, P. *La responsabilidad penal restringida artículo 22 del código penal peruano*. Lima, 2014 Recuperado de: <https://www.facebook.com/PabloAlvarezLira/posts/803944842949553>

Ucha (2009) “*Test psicológico*”. Recuperado de <https://www.definicionabc.com/social/test-psicologico.php>

García Caveró, Percy, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, Edit. Grijley, Lima, 2008. p. 207.

Hurtado Pozo, José, Manual de Derecho Penal, Parte General I, Edit. Grijley, Edic. 3ra., 2005, 1087pp, p. 647.

INEI, informe presentó el Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana 2016. Recuperado de: <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/inei-presento-el-sistema-integrado-de-estadisticas-de-criminalidad-y-seguridad-ciudadana-9236/>

Huaylla, “*El proceso inmediato a propósito de su modificación por el decreto legislativo N° 1194*”, Editorial Gaceta Juridicia, Lima, 2015. Tomo 77

Jiménez S., 2011, "*La determinación de la pena*", Revista Iuren N°9. Recuperado de <http://revistadeiureciadfacderunslgunica.blogspot.pe/2011/02/revista-de-iure-n-09.html>

MACHICADO, J , "¿Qué es la imputabilidad?", Apuntes Jurídicos™, 2013 Recuperado de <http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/05/imp.html>

Peña, A. "*Estudios sobre derecho penal y procesal penal*". (1.a ed.). Gaceta Jurídica. Lima, 2013

Proyecto ley 2153/2012.CR, Comisión especial multipartidaria de seguridad ciudadana del congreso de la república, recuperado de: [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/CA8E51746558DA8D05257E7B0063676E/\\$FILE/4_PL02153290413.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/CA8E51746558DA8D05257E7B0063676E/$FILE/4_PL02153290413.pdf)

TIEDEMANN, Klaus "introducción al derecho penal y a derecho penal procesal, Barcelona-España: Ariel, traducción de la segunda edición alemana, 1989, p140.

Gálvez Villegas , Responsabilidad civil extracontractual y delito, universidad nacional mayor de san marcos, 2008. Lima 178p , Grado académico Doctorado en Derecho. Recuperado de: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1483/1/Galvez_vt.pdf

ESPINOZA, *La Responsabilidad Penal Individual y la Jurisdicción en la Corte Penal Internacional*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2003) Lima – Perú, 78p y 56p. Recuperado de: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2246/1/Espinoza_ck.pdf

Burgos, El Proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad. Grado Magister en Ciencia Penales, 2002. Recuperado de: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualData/Tesis/Human/Burgos_M_V/T_completo.pdf

VIII. ANEXOS

Anexo 01: Matriz de consistencia

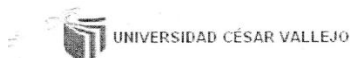
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Maissie Marlene Vasquez Cespedes

FACULTAD/ESCUELA: DERECHO / DERECHO

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	<i>LA RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA POR EDAD, EN LA DETERMINACIÓN DE LA PENA EN EL PROCESO INMEDIATO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA NORTE 2016</i>
PROBLEMA PRINCIPAL	¿Cómo afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016?
OBJETIVO GENERAL	Analizar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016.
SUPUESTO JURÍDICO PRINCIPAL	La aplicación de la Responsabilidad Restringida genera un beneficio al sujeto activo, pero posible perjuicio a la sociedad, dado que por encontrarse en “transición de madurez”, obtiene una reducción prudencial de su pena.
PROBLEMA ESPECÍFICO 1	¿Cuál es la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato el distrito judicial de Lima Norte 2016?
OBJETIVO ESPECÍFICO 1	Identificar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte.
SUPUESTO JURÍDICO 1	La importancia es que a la hora de determinar la pena esta sea debidamente motivada de acuerdo al hecho delictivo, y no ser sustentada por solo presentar la edad cronológica sin ningún otro mayor alcance que respalde la teoría presentada.
PROBLEMA	¿Cómo la facultad discrecional del juez influye en la aplicación Responsabilidad Restringida por edad en la determinación de la pena

ESPECÍFICO 2	en el distrito judicial Lima norte 2016?
OBJETIVO ESPECÍFICO 2	Determinar como la facultad discrecional del juez influye en la aplicación Responsabilidad Restringida por edad en la determinación de la pena en el distrito judicial Lima norte 2016.
SUPUESTO JURÍDICO ESPECÍFICO 2	El juez tiene la facultad discrecional de determinar la pena empleando los criterios que este crea conveniente, dependiendo del caso que se presente, más no darle un enfoque principal a la Responsabilidad Restringida por edad.
DISEÑO DEL ESTUDIO	Teoría: Fundamentada Alcance: Explicativo
POBLACIÓN Y MUESTRA	<u>Población:</u> Distrito Judicial de Lima Norte Magistrados, Especialistas en la materia, Fiscales y Abogados

Anexo 02: Validación de Entrevista – Chávez Sánchez Jaime Elider



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: CHAVEZ SANCHEZ Jaime Elider
 1.2. Cargo e institución donde labora: Docente - UCV.
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de ENTREVISTA
 1.4. Autora de Instrumento: Mariela Marlene Vasquez Caspodes

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											X		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											X		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.											X		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											X		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											X		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

90%
10%

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, 09 de Mayo del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No..... Telf.:.....

Anexo 03: Validación de Entrevista – Santisteban Llontop Pedro Pablo



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Santisteban Llontop Pedro Pablo
 1.2. Cargo e institución donde labora: Fiscal Militar Policial – Ministerio de Defensa
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista
 1.4. Autora de Instrumento: Marissie Marlene Vasquez Cespedes

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.											✓		
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.											✓		
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											✓		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											✓		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales											✓		
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.											✓		
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.											✓		
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.											✓		
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.											✓		
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.											✓		

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90%
10%

90 %

Lima, 18 de mayo del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 09803111 Telf.: 983278657

PEDRO SANTISTEBAN LLONTOP
ABogado
CAL 17951
DOCTOR EN DERECHO

Anexo 04: Validación de Entrevista – Castro Rodríguez Leslie



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Castro Rodríguez Lesly
 1.2. Cargo e institución donde labora: Itc
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUIA DE ENTREVISTAS
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Melissie Vasquez Cespedes

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													X
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													X
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													X
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													X
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.													X
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													X
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.													X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.													X
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

100 %
0 %

100 %

Lima, 24/05 del 2015

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 77746 Telf. 580 72528

Anexo 05: Validación de Jurisprudencia – Castro Rodríguez Leslie



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: *Castro Rodríguez Leslie*
 1.2. Cargo e institución donde labora: *Docente UCV*
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: *Guía de Análisis Jurisprudencial*
 1.4. Autor(A) de Instrumento: *Mariela Marlene Jaquez Espinoza*

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.													X
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.													X
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													X
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													X
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales													X
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													X
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.													X
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.													X

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

90%
10%

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

90 %

Lima, *26 de Mayo* del 2015

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. *28977746* Telf. *980712526*

Anexo 06: Validación de Jurisprudencia – Chávez Sánchez Jaime Elider

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: ... Chavez Sanchez Jaime Elider ...
 1.2. Cargo e institución donde labora: ... Docente - UCV ...
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: ... Guía de Análisis Jurisprudencial ...
 1.4. Autor(A) de Instrumento: ... Mariela Muriel Vasquez Cespedes ...

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.											X		
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.											X		
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales												X	
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

95%
05%

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 30 de junio del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No ... Telf.: ...

Anexo 07: Validación de Jurisprudencia –Roque Gutiérrez Nilda Yolanda



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: ROQUE GUTIERREZ NILDA YOLANDA
 1.2. Cargo e institución donde labora: DOCENTE FC UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Caso de Análisis Jurisprudencial
 1.4. Autora de Instrumento: Melanie Merlano Vargara Casapanta

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MINIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje comprensible.									X				
2. OBJETIVIDAD	Esta adecuado a las leyes y principios científicos.								X					
3. ACTUALIDAD	Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.										X			
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.									X				
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales										X			
6. INTENCIONALIDAD	Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.									X				
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.										X			
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.									X				
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.										X			
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico.										X			

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación

85

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

85 %

Lima, 10 Mayo del 2017

[Firma]
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 77960596 Telf. 944158851

Anexo 08: Instrumento – Entrevista

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistado:

Cargo:

Institución:

TÍTULO:

“Responsabilidad Restringida por Edad en la Determinación de la Pena en el Proceso Inmediato en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016”

El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas relacionados al derecho Penal, vinculado a la Responsabilidad Restringida por Edad. Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión.

OBJETIVO GENERAL

Identificar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016

Preguntas:

1. ¿Qué opinión le merece la vigencia del artículo 22 del código penal del Perú frente a la inseguridad ciudadana, siendo un beneficio que se sustenta bajo un supuesto de madurez?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ¿Considera usted que el sistema de justicia peruano debería apostar por una renovada posición y no ser tan benevolente con el agente activo?

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

3. ¿Qué opinión le merece que en nuestra constitución sostenga y reconozca a un ciudadano a la edad de 18 y según el código penal sostenga otra posición?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. En su opinión, ¿Considera usted que se debería sustentar con un examen psicológico la aplicación de la restricción por edad para demostrar la supuesta falta de discernimiento?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

OBJETIVO ESPECÍFICO I

Determinar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Qué opinión le merece respecto al delito de hurto agravado sea considerado el tercer más frecuente en lima norte?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

6. ¿En su opinión no es un exceso de beneficios que en el proceso inmediato ya contando la terminación anticipada, además se aplique la responsabilidad restringida por edad?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. ¿Considera usted que el proceso inmediato a liberado una cantidad considerable de la carga procesal?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OBJETIVO ESPECÍFICO II

Determinar como la facultad discrecional del juez influye en la aplicación Responsabilidad Restringida por edad con respecto al principio de igualdad en determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte.

8. ¿Cuál es su opinión sobre que el artículo 22 del código penal del Perú excluya a los delitos graves, considera usted que se ve vulnerado el principio de igualdad en la aplicación del artículo en mención?

.....

.....

.....

.....

.....

9. ¿Considera usted que es correcto que un artículo limite la facultad del juez, se debería esclarecer de manera determinante o basta con solo dejar la aplicación del segundo párrafo en facultad discrecional del juez?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10. ¿Considera usted que realmente el proceso inmediato está generando resultados positivos y contribuyendo con el sistema de justicia en el Perú?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SELLO Y FIRMA

Anexo 09: Instrumento – Jurisprudencia

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

Lima, dieciséis de agosto
de dos mil dieciséis.-

I. VISTOS:

I.1 Consulta

La sentencia contenida en la resolución número cinco de fecha uno de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas cincuenta y dos, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en razón de haber realizado el control difuso declarando inaplicable al caso concreto, el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, en el proceso penal seguido contra Luis Fernando Manuel Eguavel, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en grado de tentativa, en agravio de Matthew Romel Delgado Pereda.

I.2 Fundamentos de la resolución elevada en consulta

La sentencia elevada en consulta, sustenta la inaplicación de la norma penal, considerando que el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal, es incompatible con el artículo 2, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, referido al principio de igualdad jurídica.

II. CONSIDERANDO:

PRIMERO: Delimitación del objeto de pronunciamiento

1.1 Es objeto de pronunciamiento, la consulta de la sentencia emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en razón de haber efectuado el control difuso del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal al momento de sentenciar en un proceso penal seguido por delito de robo agravado en grado de tentativa; cabe anotar que el asunto que sube en consulta, es uno con incidencia en el ordenamiento jurídico y que reviste complejidad.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

1.2 La línea argumentativa a desarrollar en esta sentencia, inicia con efectuar precisiones, puntualizar las reglas del ejercicio del control difuso y señalar doctrina jurisprudencial, que en aplicación servirán para examinar si la norma consultada es la vinculada al caso, si evidencia inconstitucionalidad manifiesta, si la sentencia consultada ha cumplido con las reglas del control difuso y si ha sustentado en el caso particular que la norma resulta inconstitucional, conduciéndonos finalmente a establecer si corresponde o no aprobar la sentencia elevada en consulta.

SEGUNDO: Sobre el control difuso

2.1 En un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, prevalece la norma constitucional cuya supremacía y jerarquía (reconocida en el artículo 51 de la Constitución Política), debe ser preservada por todos los jueces al momento de resolver los casos de su competencia, habiendo sido habilitados por mandato constitucional para tales fines, ejercer la revisión judicial de las leyes, esto es, el control difuso, conforme al segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución Política del Perú que prevé: *"En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera"*.

2.2 La autorización constitucional a los jueces para el ejercicio del control difuso, tiene límites bajo responsabilidad, no pudiendo ser ejercida en forma irrestricta ni vulnerando el ordenamiento jurídico y constitucional que justamente les corresponde preservar.

2.2.1 En ese sentido, el control difuso se ejerce en estricto para los fines constitucionales preservando la supremacía de las normas del bloque de constitucionalidad, es de carácter excepcional y de última ratio, sólo procede cuando no se puede salvar vía interpretativa la constitucionalidad de las normas.

2.2.2 Los jueces deben tener presente que **las normas legales gozan de presunción de constitucionalidad y son obligatorias para todos sin excepción**, como lo ordena el artículo 109 de la Constitución Política, asimismo, que, se encuentra reconocido el derecho fundamental de igualdad ante la ley, y **que corresponde a los jueces cautelar la seguridad jurídica**; en ese sentido, el

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

control difuso resulta muy gravoso al afectar la obligatoriedad de las leyes, la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica, al permitir que las normas del ordenamiento jurídico que son obligatorias y vinculantes para todos sin excepciones, sean inaplicadas en algunos casos particulares a diferencia de la generalidad y sólo para los fines constitucionales, por lo que el ejercicio del control difuso debe ser realizado conforme parámetros de compatibilidad constitucional.

2.2.3 En ese contexto, el control difuso conlleva una labor compleja que ineludiblemente debe ser observada por los jueces y traducida en la motivación de la decisión judicial, en tanto garantiza que están actuando conforme a los fines de preservar la supremacía de la norma constitucional, que no están vulnerando la presunción de legitimidad y constitucionalidad de las leyes, no están actuando en contra del ordenamiento jurídico, ni utilizando el control difuso para fines distintos a los permitidos.

2.2.4 Es ineludible reiterar que la facultad de los jueces para ejercer el control difuso está limitado al caso particular, constituye un control en concreto con efecto inter partes, en ese orden el análisis, la identificación de los derechos involucrados, la intervención y su intensidad, la aplicación del test de ponderación, están inescindible y obligatoriamente vinculado a los datos y particularidades del caso; no está permitido un control en abstracto de las leyes, el cual compete al Tribunal Constitucional en acción de inconstitucionalidad decidiendo con efecto erga omnes, tribunal que ha señalado en relación al control difuso, que *está vedado cuestionar hipotética o abstractamente la validez constitucional de las leyes*¹.

2.3 La Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, es el órgano con jurisdicción constitucional para conocer con exclusividad el control concentrado de normas infralegales conforme a lo previsto en el artículo 85 del Código Procesal Constitucional y el inciso quinto del artículo 200 de la Constitución Política; asimismo, cuenta con competencia exclusiva para absolver las consultas por ejercicio de los jueces del control difuso de normas legales e infralegales en general, preservando la supremacía de las normas

¹ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02132-2008-AA fundamento 19.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

constitucionales, ello conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 14, del inciso tercero del artículo 35 del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial y conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional², en concordancia con lo previsto en el artículo 138 de la Constitución Política, en consecuencia es también un órgano de control de constitucionalidad en abstracto y en concreto, cuyas decisiones son vinculantes.

2.4 Las exigencias y complejidad que reviste el ejercicio del control difuso, ha conducido al *Tribunal Supremo de la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial* en compatibilidad con nuestro ordenamiento constitucional, a desarrollar **pautas vinculantes que orientan a los jueces al momento de efectuar el control judicial de las leyes, las que constituyen jurisprudencia de esta Sala Suprema³, se encuentran incorporadas en el Segundo Tema del Primer Pleno Jurisdiccional en Materia Constitucional y Contencioso Administrativo⁴** aprobado por Resolución Administrativa N° 440-2015-P-PJ del trece de noviembre de dos mil quince, sustentando el carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial de conformidad al artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cuál fue publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el dos de febrero de dos mil dieciséis; no obstante, se advierte el incremento de procesos en que los jueces vienen inaplicando indistintamente normas legales e incluso contrariando el ordenamiento constitucional, por lo que es necesario **reiterar el carácter vinculante de los Acuerdos del Primer Pleno Constitucional**, y al amparo de lo previsto en el artículo 22 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, **establecer**

² El inciso tercero Del artículo 35 del T.U.O. de La Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que la Sala Constitucional y Social conoce de las consultas conforme al Código Procesal Constitucional, el que regula el control difuso e interpretación constitucional en el artículo VI citado.

³ Consulta N° 286-2013-Arequipa, Consulta N° 555-2013-Arequipa, Consulta N° 10807-2013-Arequipa, Consulta N° 3221-2013, Consulta N° 7598-2016-Cañete, Consulta N° 14634-2013, Consulta N° 02822-2013, Consulta N° 02050-2015, Consulta N° 9548-2012, Consulta N° 08075-2014, Consulta N° 10277-2014, Consulta N° 05699-2015, Consulta N° 04980-2015, Consulta N° 10807-2013, Consulta N° 12895-2013, Consulta N° 12102-2013, Consulta N° 00833-2015, Consulta N° 02747-2015, Consulta N° 00600-2015, Consulta N° 1549-2015.

Asimismo lo tiene señalado el Tribunal Constitucional, en Exp. N° 00014-2009-PI/TC, fundamentos 16 al 40; Exp. N° 06730-2006-AA fundamentos 14 al 16, 2132-2008-AA fundamentos 161 al 26.

⁴ **I Pleno en Materia Constitucional y Contencioso Administrativo**, Segundo Tema: II. el Ejercicio Jurisdiccional del Control Difuso en Autos y Sentencias, Acuerdo 2.- Para el ejercicio del control difuso de la constitucionalidad normativa, los jueces de la República deberán observar, en ese orden, los criterios de 1) Fundamentación de incompatibilidad constitucional concreta, 2) Juicio de relevancia, 3) Examen de convencionalidad, 4) Presunción de constitucionalidad, 5) Interpretación conforme a la Constitución.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

que los fundamentos de este considerando, se constituyan en doctrina jurisprudencial que deben ser observados por todos los jueces cuando realicen el control difuso, garantizando así los fines constitucionales de su ejercicio.

2.5 Enfatizando las siguientes reglas para el ejercicio del control difuso judicial:

i. Partir de la presunción de validez, legitimidad y constitucionalidad de las normas legales, las que son de observancia obligatoria conforme lo prevé el artículo 109 de la Constitución Política⁵, gozan de legitimidad en tanto hayan sido promulgadas conforme al procedimiento previsto en la Constitución⁶; debiendo suponer a priori que la norma no viene viciada de ilegitimidad, en ese orden, quien enjuicie la norma esgrimiendo infracción a la jerarquía de la norma constitucional, debe cumplir con la exigencia de demostrar objetivamente la inconstitucionalidad alegada⁷.

ii. Realizar el juicio de relevancia, en tanto solo podrá inaplicarse una norma cuando es la vinculada al caso, debiendo los jueces ineludiblemente verificar si la norma cuestionada es la aplicable permitiendo la subsunción de las premisas de hecho en los supuestos normativos, constituyendo la regla relevante y determinante que aporta la solución prevista por el ordenamiento jurídico para resolver el caso concreto; en tanto la inaplicación permitida es sólo respecto de la norma del caso en un proceso particular.

iii. Identificada la norma del caso, el juez debe efectuar una **labor interpretativa exhaustiva**, distinguiendo entre disposición y norma, siendo el primero el texto o enunciado legal sin interpretar, y la norma es el resultado de la interpretación, por lo que siendo el control difuso la ultima ratio, que se ejerce cuando la disposición no admite interpretación compatible con la Constitución⁸, es obligación de los jueces haber agotado los recursos y técnicas interpretativas para salvar la constitucionalidad de la norma legal; por el contrario el uso indiscriminado acarrea inseguridad jurídica en relación a la aplicación de las normas, vulnerando el orden del sistema normativo⁹.

⁵ Artículo 109 de la Constitución Política del Perú: La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

⁶ El artículo 108 de la Constitución establece el procedimiento de aprobación y promulgación de una ley

⁷ CANOSA USERA, Raúl, Interpretación y Fórmula Política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988.

⁸ MESIA, Carlos, Exégesis del Código Procesal Constitucional, Gaceta Jurídica, Primera Edición, Lima, año 2004, página 77.

⁹ El control difuso tiene como antecedente la "judicial review" de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos en el caso Marbury vs Madison, actuando como Juez Supremo y Presidente de la Sala John Marshall en la acción de "Writ of Mandamus", estableciendo la supremacía de la Constitución y que una ley contraria a ella era

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

iv. En esencia el control difuso es un control de constitucionalidad en concreto que conlleva la inaplicación al caso particular¹⁰, por lo que **es exigencia ineludible iniciar identificando los derechos fundamentales involucrados en el caso concreto, el medio utilizado, el fin perseguido, el derecho fundamental intervenido y el grado de intervención**, para así poder aplicar el test de proporcionalidad u otro de igual nivel de exigencia, examinando si la medida legal en cuestión, supera el examen de idoneidad (de medio a fin), el examen de necesidad (de medio a medio), y el examen de proporcionalidad en sentido estricto (cuanto mayor la intensidad de la intervención o afectación del derecho fundamental, debe ser mayor el grado de satisfacción u optimización del fin constitucional)¹¹.

TERCERO: Sobre la presunción de constitucionalidad de la norma inaplicada

3.1 La sentencia consultada impone pena privativa de la libertad reducida de cinco años, inaplicando la norma del segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal que excluye de la reducción de la pena legal a los agentes del ilícito de robo agravado.

3.2 El examen de la norma inaplicada, se inicia con la **presunción de su constitucionalidad, validez y legitimidad**, norma que integra el cuerpo normativo del Código Penal promulgado por Decreto Legislativo N° 635 publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y uno; superando el control de producción normativa conforme el procedimiento constitucional del artículo 108, por ende las normas se encuentran vigentes y son de carácter obligatorio conforme a la norma constitucional del artículo 109.

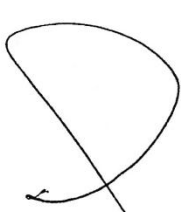
nula e ineficaz; sin embargo dicha Corte también tiene establecido que la validez constitucional es la última cuestión que realizará sobre una ley, debido que en principio no se busca una confrontación de la ley con la Constitución, debiendo agotarse todos los recursos para encontrar su constitucionalidad, y solo cuando sea inevitable se admite la revisión judicial de la ley.

¹⁰ En nuestro Estado Constitucional y Democrático de Derecho se encuentran atribuidas las competencias, y en lo que se refiere al control de inconstitucionalidad en abstracto de una norma legal, es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional de conformidad al inciso primero del artículo 202 de la Constitución Política, y no de los jueces del Poder Judicial, a quienes si bien se les ha atribuido un control de constitucionalidad en el segundo párrafo del artículo 138, este se encuentra limitado al control concreto para los casos particulares de los procesos a cargo del Juez y que le corresponde resolver.


¹¹ Igualmente se cuenta con jurisprudencia desarrollada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, respecto a la aplicación del test de proporcionalidad en las sentencias emitidas en las Consultas N° 00600-2015, 00833-2015, 02757-2015, 02747-2015, 03529-2014, 07307-2014, 12895-2013, 12102-2013, 02822-2013, 05699-2015, 04980, y en las sentencias de Acción Popular N° 03009-2013, 6176-2012, 1737-2015.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE




3.3 El artículo 22 en el texto vigente al momento de los hechos¹², contiene varias normas sobre imputabilidad restringida, de las cuales se relaciona con el caso concreto, *la que excluye a los agentes de menores de veintiún años, de la reducción de la pena cuando hubieren cometido el delito de robo agravado; norma que se vincula en forma directa e indisoluble con la determinación de la pena para el procesado Luis Fernando Manuel Eguave*, que en sentencia ha sido encontrado responsable como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, cometido cuando tenía dieciocho años de edad, y que de acuerdo a la norma citada el acusado se encuentra excluido de la posibilidad de reducción de la pena mínima señalada en la ley; **superando la norma el juicio de relevancia.**




3.4 Procediendo a la interpretación, se observa que la disposición legal contiene varias normas referidas a la imputabilidad restringida:

3.4.1 El artículo legal contiene como regla general en el primer párrafo, que: *"Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción"*; la norma **no** contiene mandato de reducción de la pena mínima legal en forma obligatoria e irrestricta para todos los agentes con imputabilidad restringida, contemplando la posibilidad de reducción prudencial, lo cual exige del juez evaluación y determinación motivada de la decisión en cada caso, **significando que aún se trate de agentes con imputabilidad restringida e indistintamente del tipo de ilícito cometido, no siempre conllevará una reducción de la pena mínima legal.**



3.4.2 Asimismo el primer párrafo de la norma establece restricciones contemplando la salvedad para algunos casos de reincidencia, y el segundo párrafo (enjuiciado), precisa exclusiones a la reducción de la pena para los agentes integrantes de una



¹² El texto vigente a la fecha de comisión del ilícito (30 de diciembre de 2015), se encontraba modificado por Decreto Legislativo N° 1181 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de julio de 2015, emitido el Presidente de la República con intervención del presidente del consejo de Ministros y el Ministro del Interior, en razón de la delegación de facultades legislativas otorgada por el Congreso de la República mediante Ley N° 30336.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618-2016
LIMA NORTE

organización criminal, a los que hayan incurrido entre otros delitos, el de robo agravado¹³.

3.5 La norma materia de análisis se vincula con los principios generales del Código Penal, como el artículo II del Título Preliminar que prevé que *nadie será sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en la ley* vigente al momento de la comisión¹⁴, reafirmando como principio la vinculación a la pena legal prevista en el ordenamiento jurídico y producida conforme al procedimiento constitucional, conteniendo el Código Penal las penas mínimas y máximas para cada hecho punible. Asimismo, se vincula con la norma del artículo V que establece que *sólo el Juez competente puede imponer las penas y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley*; acogiendo el principio de legalidad en la pena y en la graduación¹⁵.

Las normas del artículo 22 establecen excepciones a dicho principio y un tratamiento diferenciado, posibilitando la reducción de la pena legal a algunos supuestos de imputabilidad restringida; extrayendo que la vinculación a la pena legal es la regla general y principio del Código Penal, y que el tratamiento diferenciado en la ley lo ocasiona el artículo 22 al crear una posibilidad para

¹³ (*) Artículo modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1181, publicado el 27 julio 2015, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 22. Responsabilidad restringida por la edad

Podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en los artículos 111, tercer párrafo, y 124, cuarto párrafo.

Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, sicariato, conspiración para el delito de sicariato y ofrecimiento para el delito de sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, genocidio, desaparición forzada, tortura, atentado contra la seguridad nacional, traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua.”

¹⁴ Principio de Legalidad

Artículo II.- Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella.

¹⁵ Garantía Jurisdiccional

Artículo V.- Sólo el Juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad; y no puede hacerlo sino en la forma establecida en la ley.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

algunos agentes con imputabilidad restringida, supuesto normativo que se vincula y sustenta en los fines de la pena.

Reiteramos, **que la norma que prevé la reducción de la pena, en sí no es una norma universal e igualitaria para todos los supuestos de imputabilidad restringida**, sino que, contiene distinciones al establecerla como "posibilidad", lo cual significa que a todos los agentes con imputabilidad restringida no se les podrá reducir la pena, ello dependerá de las particularidades del agente y del caso, evaluadas y motivadas en la decisión del juez.

3.6 En efecto, **la norma en cuestión, si contiene un tratamiento desigual a)** desde la consideración de imputabilidad restringida; **b)** del beneficio de reducción de la pena para algunos agentes con imputabilidad restringida, creando una excepción a la vinculación a la pena legal prevista para todos los casos; **c)** respecto al tratamiento diferenciado entre agentes con imputabilidad restringida indistintamente del ilícito cometido, en que la reducción es una posibilidad; **d)** por la exclusión de los reincidentes, de los integrantes de organización criminal y de los agentes de delitos graves y pluriofensivos, a la posibilidad de reducción de la pena legal. Debemos resaltar **que de la excepción creada a la regla general, el segundo párrafo del artículo 22, distingue que algunos agentes que hayan incurrido en delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua, no serán comprendidos en la regla de excepción, manteniendo para ellos la vinculación a la pena legal.**

3.7 En este caso concreto, el problema que se plantea en el cuestionamiento de la norma reside en la exclusión a los agentes del delito de robo agravado (con imputabilidad restringida), de la posibilidad de reducción de la pena, correspondiendo examinar si dicha restricción, infracciona la Constitución en relación al derecho a la igualdad.

3.7.1 En principio, **el derecho fundamental a la igualdad se encuentra considerado y protegido en los artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconociendo que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad,**

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

que todos son iguales ante la ley, que tienen derecho a igual protección de la ley, y protección contra todo acto de discriminación¹⁶; y en los artículos 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asumiendo los Estados el compromiso de respetar los derechos fundamentales y garantizar su pleno ejercicio sin discriminación alguna, al derecho a la igualdad ante la ley con derecho a igual protección de la ley¹⁷.

3.7.2 Reconocido en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, en dos dimensiones, una la **igualdad como prohibición de discriminación** (*por el cual es discriminatorio todo trato diferenciado que atente contra la dignidad de la persona humana, sea por condiciones de superioridad o inferioridad, no obstante no toda distinción de trato puede considerarse violatoria por si misma de la dignidad humana*); la segunda, **igualdad ante la ley** que deriva la concepción de igualdad como prohibición de trato arbitrario (sustenta que la ley se aplica igual a todos los individuos).

3.7.3 La interpretación vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹⁸, establece que **un trato diferenciado basado en criterios razonables y objetivos, que se sustente en desigualdades reales y objetivas, no constituye discriminación** (OC-4/84 del diecinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, párrafo cincuenta y seis y cincuenta y siete).

3.7.4 En ese sentido, se anota que toda restricción o tratamiento diferente en la ley no conlleva necesariamente una afectación al derecho a la igualdad, en tanto la exigencia es el trato igual entre iguales admitiendo un trato diferente entre desiguales, por lo que el examen se circunscribe a determinar: **si es o no una**

¹⁶ Artículo 1º: Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 7º: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

¹⁷ Artículos 1º: 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 24º: Igualdad ante la Ley: Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

¹⁸ Interpretación vinculante conforme a la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Constitución Política.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

diferencia no justificada de trato en la reducción de la pena, entre agentes de delitos con imputabilidad restringida, por razón del delito cometido.

3.8 En consecuencia el derecho del agente a la igualdad ante la ley, reconocido en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado garantiza el trato igual entre iguales, y desigual entre desiguales, **siendo posible realizar distinciones en base a criterios objetivos y razonables considerando desigualdades de hecho, como instrumento para proteger a quienes deban ser protegidos por circunstancias de mayor o menor fragilidad o desamparo en que se encuentren.**

3.8.1 La norma del artículo 22 del Código Penal cumple dichas exigencias al establecer: en primer lugar un *tratamiento desigual por razón de la edad del agente* confiriéndole imputabilidad restringida; en segundo lugar estableciendo la *posibilidad del beneficio de la reducción de la pena* sólo para aquellos con imputabilidad restringida, con exclusión de la generalidad de agentes, brindando un tratamiento legal diferente y especial, debido a que la pena requerida **puede** ser en algunos casos menor al mínimo legal; y, en tercer lugar de aquellos que tienen imputabilidad restringida que sean reincidentes, integrantes de organización criminal, y los que hubieren cometido **delitos graves y pluriofensivos**, los mantiene en el régimen común, constituyendo un trato igualitario con relación a la generalidad de imputados, y uno diferente con relación a otros agentes con imputabilidad restringida que tienen la posibilidad de acceder a la reducción de pena.

En este último supuesto, la norma guarda concordancia con el principio de vinculación a la pena legal previsto en el artículo II del Título Preliminar del Código Penal, con la norma del artículo VII que establece que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor¹⁹, con el principio de proporcionalidad, previsto en el artículo VIII que establece que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho; y el trato diferente se justifica con los fines constitucionales de la

¹⁹ Responsabilidad Penal
Artículo VII.- La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

pena, reeducación, rehabilitación y reinserción del penado a la sociedad²⁰, en concordancia a la función de la pena contemplada en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal, en tanto la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora²¹, justificando la exclusión de la reducción de la pena mínima legal, para el agente que incurre en delitos graves que lesionan varios bienes protegidos constitucionalmente, así en el caso del ilícito de robo agravado el agente actúa vulnerando el derecho a la propiedad, derecho a la integridad, dignidad y seguridad de la persona agraviada²², para ellos igual que la generalidad, la pena será dentro de los límites legales, atendiendo que el tiempo requerido para los fines de la pena y reinserción con éxito a la sociedad, se prevé que será mayor conteniendo una exigencia legítima y específica al mantener los límites legales de la pena cuando se incurren en delitos de gravedad y pluriofensivos²³.

3.8.2 Concluyendo, que estamos ante un tratamiento jurídico desigual legítimamente establecido²⁴, compatible con los fines constitucionales de la pena, por lo que la norma en ninguna de sus regulaciones evidencia supuesto de inconstitucionalidad, pues como se tiene señalado, no todo tratamiento jurídico diferente concluye en un trato discriminatorio, pues en principio no toda distinción de trato es ofensiva a la dignidad humana, sino cuando ella carece

²⁰ El fin perseguido de la norma, el cual está vinculado a la finalidad de la pena, que de acuerdo a la norma del inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política, el fin constitucional de la pena es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.

²¹ Fines de la Pena y Medidas de Seguridad

Artículo IX.- La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.

²² El delito de robo agravado daña gravemente otros derechos fundamentales como la propiedad, el derecho a la integridad, dignidad y seguridad de la persona humana agraviada que también goza de protección constitucional en el artículo primero y fundante que establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, así como la propiedad en el artículo 70 establece que el derecho de propiedad es inviolable, y que el Estado lo garantiza

²³ Conforme señala Robert Alexis, en el caso que no hubiera ninguna razón suficiente para la permisión de tratamiento igual se encuentra ordenado un trato igual, en cambio, si hay razón suficiente para ordenar un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento desigual (citado por José Víctor García Izaguirre, *El Test de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales*, Editorial Adrus, 2012, página 433).

²⁴ Criterios acogidos de la OC-4/84 del 19 de enero de 1984, párrafo 57: No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

de justificación objetiva y razonable, existiendo desigualdades de hecho que legítimamente se traducen en desigualdades de tratamiento jurídico²⁵, manteniendo la norma la presunción de constitucionalidad en abstracto.

No obstante, de existir afectación a un derecho fundamental del agente del caso particular, es necesario identificar cual es ese derecho y evaluar la intensidad de la intervención según las circunstancias e incidencias del caso para el ejercicio del control difuso, debiendo tener presente que la graduación y reducción de la pena es ejercida por el Juez Penal conforme a ley, y que cuando ejercita el control difuso actúa como Juez Constitucional atendiendo a la protección de derechos fundamentales, requiriendo acudir al test de ponderación para determinar que la intensidad de la intervención conlleve a quebrar los límites impuestos por la norma legal; más dicho examen no puede sustentarse en alegaciones genéricas de afectación al derecho a la igualdad y/o de otro derecho fundamental, no siendo admisible un control en abstracto como si fuera una regla general para todos los casos, reiterando que se exige un control en concreto.

CUARTO: Control de Constitucionalidad en el caso concreto

4.1 En el asunto materia de análisis, la sentencia sustenta la condena por delito de robo agravado en grado de tentativa, en que el ilícito se produjo el 30 de diciembre del 2015 a las 12:30 horas, en agravio de un adolescente de catorce (14) años de edad, que entre tres sujetos lo tomaron violentamente del cuello, lo tiraron al suelo y lo golpearon en el rostro, sustrayéndole el celular y dándose a la fuga; siendo condenado el acusado por el ilícito de robo agravado previsto en el artículo 189 con los agravantes de los incisos 4 y 7 del Código Penal.

²⁵ Conforme a la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, párrafo 56: Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Ya la Corte Europea de Derechos Humanos basándose "en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos" definió que sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de justificación objetiva y razonable" [Eur. Court H.R., Case "relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" (merits), judgment of 23rd July 1968, pág. 34]. Existen, en efecto, ciertas desigualdades de hecho que legítimamente pueden traducirse en desigualdades de tratamiento jurídico, sin que tales situaciones contraríen la justicia. Por el contrario, pueden ser un vehículo para realizarla o para proteger a quienes aparezcan como jurídicamente débiles. Mal podría, por ejemplo, verse una discriminación por razón de edad o condición social en los casos en que la ley limita el ejercicio de la capacidad civil a quienes, por ser menores o no gozar de salud mental, no están en condiciones de ejercerla sin riesgo de su propio patrimonio.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

4.2 En cuanto a la determinación de la pena, la consultada anota que la pena legal del ilícito es no menor de 12 años, que aplicando los atenuantes, las circunstancias específicas, se ubica en el tercio inferior, por grado de tentativa le reduce a tres años, y ejerciendo el control difuso, considerando el acuerdo, y terminación anticipada, le reduce y aplica **cinco años de pena privativa de libertad**.

4.3 Al respecto se puntualiza, que el objeto de consulta es la inaplicación de la norma que excluye al sentenciado de la reducción de la pena por imputabilidad restringida; los fundamentos de la recurrida sobre el asunto, se encuentran en el considerando cuarto, señalando como fundamento la Sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en el Recurso de Nulidad N° 1949-2012-Lima Norte, anota que en los casos de los jóvenes delincuentes se justifica razonablemente la aplicación del atenuante al no alcanzar a esa edad la plena madurez, aplicando un tratamiento especial, enunciando acogerse a los fundamentos de la sentencia suprema citada, aplica el control difuso de la norma por vulnerar el principio de igualdad.

4.4 Con suma preocupación se advierte, que la **sentencia consultada no contiene ningún fundamento para ejercitar el control difuso en el caso particular del sentenciado Luis Fernando Manuel Eguavel; tampoco contiene argumentos para decidir la reducción de la pena por imputabilidad restringida, pues no es suficiente limitarse a la edad; asimismo, llama la atención que el juez no ha tenido en cuenta que el control difuso es residual, y que su ejercicio debe estar motivado**, lo cual no ha sido cumplido en la sentencia consultada que se limita a referirse a la Sentencia de la Sala Penal Suprema Transitoria, con un examen en abstracto, sin haber analizado y sustentado las particularidades del caso para inaplicar una norma legal y vinculante, contraviniendo los fines constitucionales del control difuso; pues como se tiene señalado en el considerando anterior 3.4 y 3.5, la regla general se refiere a una "posibilidad" de reducir, y no una reducción automática, exigiendo en compatibilidad con la garantía de motivación²⁶,

²⁶ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado en relación al derecho fundamental a la motivación, que es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, que es una garantía de la correcta administración de justicia que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad a las decisiones judiciales, estando los jueces vinculados por el ordenamiento jurídico y en un Estado Constitucional de Derecho, a expresar los sustentos de su

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618- 2016
LIMA NORTE

que el juzgador exponga las razones y consideraciones del caso concreto, que lleven a reducir la pena por debajo del mínimo legal, y en el caso de los agentes que no cuenten con el beneficio de reducción de la pena, solo ampararía un control difuso con inaplicación de la norma legal, cuando se determine por las circunstancias y particularidades, y en forma debidamente motivada, la afectación concreta a un derecho fundamental.

4.5 Por el contrario, la consultada contiene argumentos en forma genérica que van orientadas al control abstracto de la norma legal, lo cual no se encuentra en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política del Estado y del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que autoriza la revisión judicial de las leyes para el caso concreto que se está decidiendo; agréguese, que como se tiene explicado en el considerando tercero de esta ejecutoria, la norma legal al establecer un trato diferenciado entre diferentes, no pierde la presunción de constitucionalidad al no evidenciar vulneración del principio de igualdad, y más bien, los jueces al inaplicar normas a casos particulares sin cumplir los supuestos para el control difuso, están vulnerando el principio de igualdad ante la ley, inaplicando injustificadamente y contra los fines del control difuso, la norma que contiene la prohibición de aplicar la reducción de la pena; por lo que se desaprueba la sentencia consultada.

III. DECISIÓN:

Por estas consideraciones Resolvieron:

Primero.- Establecer que los fundamentos del segundo considerando de esta sentencia, **CONSTITUYE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL VINCULANTE** para todos los jueces del Poder Judicial.

Segundo.- DESAPROBAR la sentencia consultada, contenida en la resolución número cinco, de fecha uno de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas cincuenta y dos, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el proceso penal seguido contra Luis

decisión al momento de emitir sus resoluciones a efectos de evitar excesos y arbitrariedades. Caso Tristán Donoso vs Panamá 27 de enero de 2009 párrafo 153, Caso Apitz Barbera y otros, 5 de agosto de 2008 fundamento 77.

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXP. N° 1618-2016
LIMA NORTE

Fernando Manuel Eguavel, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en grado de tentativa, en agravio de Matthew Romel Delgado Pereda; en consecuencia, **NULA** la referida sentencia, debiendo el Juez de la causa emitir nuevo pronunciamiento, conforme a lo expuesto en la presente resolución; **ORDENARON** la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial "El Peruano", conforme a ley; y los devolvieron.- Juez Supremo Ponente: **Rueda Fernández.-**

SS.

LAMA MORE

VINATEA MEDINA

RUEDA FERNÁNDEZ

TOLEDO TORIBIO

MALCA GUAYLUPO

Mat/jps

Anexo 10: Entrevista a Marco Antonio Baltuano Vasquez

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistado: *Marco Antonio Baltuano Vasquez*
Cargo: *Fiscal Provincial Titular de la 14^{ma}*
Fiscalía Provincial Penal
Institución: *Distrito Fiscal de Lima Norte.*

TÍTULO:

"Responsabilidad Restringida por Edad en la Determinación de la Pena en el Proceso Inmediato en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016"

El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas relacionados al derecho Penal, vinculado a la Responsabilidad Restringida por Edad. Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión.

OBJETIVO GENERAL

Identificar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016

Preguntas:

1. ¿Qué opinión le merece la vigencia del artículo 22 del código penal del Perú frente a la inseguridad ciudadana, siendo un beneficio que se sustenta bajo un supuesto de madurez?

Efectivamente ahí una preocupación en estos tiempos, porque la inseguridad está atacando a nuestra sociedad pero paulatinamente se han venido realizando algunos cambios, como ejemplo podemos tener: la violación de Menores o robo agravado que antes funcionaba como un atenuante ya ahora no. Por lo que este artículo tampoco debería considerarse bajo un supuesto.

2. ¿Considera usted que el sistema de justicia peruano debería apostar por una renovada posición y no ser tan benevolente con el agente activo?

A nivel mundial el sistema garantista gana terreno porque las normas que se dictan apuntan a ese sistema, aunque en nuestro país no se aplique de manera correcta.

además, en nuestro ordenamiento tenemos normas inconstitucionales por lo cual si sería conveniente renovar su posición.

3. ¿Qué opinión le merece que en nuestra constitución sostenga y reconozca a un ciudadano a la edad de 18 y según el código penal sostenga otra posición?

a pesar que los conceptos de responsabilidad civil se distinguen de la responsabilidad penal, existe una relación entre ellos, por lo cual se debería establecer bajo que parámetros se debe manejar.

4. En su opinión, ¿Considera usted que se debería sustentar con un examen psicológico la aplicación de la restricción por edad para demostrar la supuesta falta de discernimiento?

En mi opinión considero que debería haber un pleno cabatorio y establecer si está trayendo frutos la aplicación de este artículo. Ya que la norma debe evolucionar a la par con la realidad actual.

OBJETIVO ESPECÍFICO I

Determinar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Qué opinión le merece respecto al delito de hurto agravado sea considerado el tercer más frecuente en Lima Norte?

Es un delito común en todo el Perú y Lima Norte no es un lugar ajeno a ello, lo cual es lamentable y se le debe dar la importancia del caso aunque esto no sea un delito grave.

6. ¿En su opinión no es un exceso de beneficios que en el proceso inmediato ya contando la terminación anticipada, además se aplique la responsabilidad restringida por edad?

Podría parecerlo, si no se aplica de manera correcta. Su aplicación debe darse de manera proporcional y que sea debidamente motivada. Caso contrario si se veía como un exceso.

7. ¿Considera usted que el proceso inmediato a liberado una cantidad considerable de la carga procesal?

Si está liberando buena parte de la carga procesal, puesto que los casos se resuelven al momento, es decir no se deja carga pendiente.

OBJETIVO ESPECÍFICO II

Determinar como la facultad discrecional del juez influye en la aplicación Responsabilidad Restringida por edad con respecto al principio de igualdad en determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte.

8. ¿Cuál es su opinión sobre que el artículo 22 del código penal del Perú excluya a los delitos graves, considera usted que se ve vulnerado el principio de igualdad en la aplicación del artículo en mención?

Existe en nuestro ordenamiento, gran cantidad de normas inconstitucionales y considero que el segundo párrafo sería uno de esos casos, por lo cual se debería revisar y esclarecer dicho artículo en todos sus extremos.

9. ¿Considera usted que es correcto que un artículo limite la facultad del juez, se debería esclarecer de manera determinante o basta con solo dejar la aplicación del segundo párrafo en facultad discrecional del juez?

En mi opinión, no puede haber una norma que condicione al juez debido a que este tiene la facultad de ejercer su criterio de acuerdo a las normas y a la situación que se le presenta, acorde a ello el delito.

10. ¿Considera usted que realmente el proceso inmediato está generando resultados positivos y contribuyendo con el sistema de justicia en el Perú?

Considero, que si están generando aportes positivos al sistema, reiterando que es de gran ayuda, que se libere la carga procesal. Además, se debería ademas mas juzgados para cubrir la demanda y con el tiempo se vayan cubriendo algunos conflictos que se están dando por su reciente implementación.

MARCO ANTONIO BALBUENA VASQUEZ
FISCAL PROVINCIAL PENAL
14va. Fiscalía Provincial Penal
Distrito Fiscal de Lima Norte

SELLO Y FIRMA

Anexo 11: Entrevista a Oscar Crisóstomo Salvatierra

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistado: Oscar Alfredo Crisóstomo Salvatierra

Cargo: Juez del 1er Juzgado de Investigación Preparatoria

Institución: Corte Superior de Lima Norte

TÍTULO:

"Responsabilidad Restringida por Edad en la Determinación de la Pena en el Proceso Inmediato en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016"

El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas relacionados al derecho Penal, vinculado a la Responsabilidad Restringida por Edad. Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión.

OBJETIVO GENERAL

Identificar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016

Preguntas:

1. ¿Qué opinión le merece la vigencia del artículo 22 del código penal del Perú frente a la inseguridad ciudadana, siendo un beneficio que se sustenta bajo un supuesto de madurez?

Hay una presunción que a partir de los 18 años ya hay una madurez y en el ámbito penal hasta los 21, se considera que no es plena. Sin embargo, en su experiencia ha podido presenciar distintos casos por lo que si faltaría un elemento que ratifique porque no todos maduran a la misma edad, de igual modo se debe tomar en cuenta la edad cronológica ya que en el proceso inmediato no se cuenta con un elemento adicional.

2. ¿Considera usted que el sistema de justicia peruano debería apostar por una renovada posición y no ser tan benevolente con el agente activo?

Hay que distinguir los casos, la responsabilidad restringida fue incorporada en el año 91 con naturaleza de atenuante y ahora la corte suprema ha establecido un criterio que debe reconocerse en todos los casos, por ello se tutela que el agente activo goce de ese beneficio y por otro lado la sociedad también.

sea satisfecha, con la sanción impuesta a.....

3. ¿Qué opinión le merece que en nuestra constitución sostenga y reconozca a un ciudadano a la edad de 18 y según el código penal sostenga otra posición?

se debe distinguir la responsabilidad civil de la responsabilidad penal, por lo que la responsabilidad penal tiene y se maneja de sus parámetros, por fines del delito, por lo que se tiene una posición distinta a la obtención de ciudadanía. Tales como fines electorales, entre ambos hay una distinción.....

4. En su opinión, ¿Considera usted que se debería sustentar con un examen psicológico la aplicación de la restricción por edad para demostrar la supuesta falta de discernimiento?

Si debería de contarse con un examen psicológico o psiquiátrico, para que se determine la madurez. De manera que la edad no sea un criterio sino su madurez en la etapa delincuencial, como ejemplo de que si alguien está cometiendo delito desde los 15 años, se entiende que a los 21 ya tiene madurez plena para el delito.....

OBJETIVO ESPECÍFICO I

Determinar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Qué opinión le merece respecto al delito de hurto agravado sea considerado el tercer más frecuente en lima norte?

Dentro los delitos de OAF ya son todos mayores de los 21 años, en caso de conducción en estado de ebriedad, uno o dos casos están dentro de las edades de 18 a 21 años y en casos de Hurto agravado hay varios casos que calzan en la responsabilidad Res. Tringida por edad.....

6. ¿En su opinión no es un exceso de beneficios que en el proceso inmediato ya contando la terminación anticipada, además se aplique la responsabilidad restringida por edad?

En algunos casos si se debe emitir aplicar la responsabilidad restringida como tal, pero en delitos tales como Robo se debe tomar en cuenta el contenido del Artículo 46, además de tener siempre en cuenta el principio de proporcionalidad y principio de racionalidad.

7. ¿Considera usted que el proceso inmediato a liberado una cantidad considerable de la carga procesal?

Dentro de los casos que ha resuelto, casi un 90% o 95% ya se ha dictado sentencia, tales como pena efectiva o suspendida, reserva de fallo, etc. Si se ha liberado la carga procesal, una de sus ventajas es que se puede llegar a un acuerdo.

OBJETIVO ESPECÍFICO II

Determinar como la facultad discrecional del juez influye en la aplicación Responsabilidad Restringida por edad con respecto al principio de igualdad en determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte.

8. ¿Cuál es su opinión sobre que el artículo 22 del código penal del Perú excluya a los delitos graves, considera usted que se ve vulnerado el principio de igualdad en la aplicación del artículo en mención?

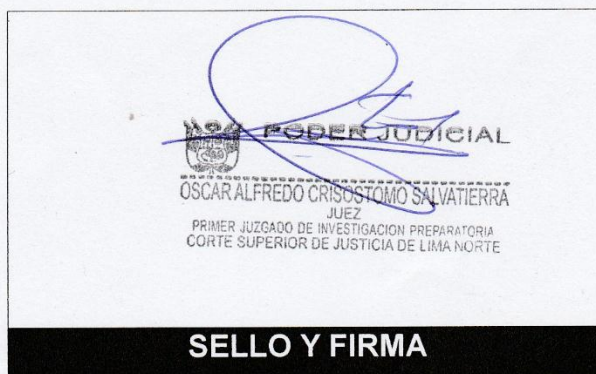
Si, aplicado control difuso en una sentencia pero el Tribunal lo declaro nulo porque según observaron, la falta motivación y ello debido a un pleno que se dicto luego de emitida la sentencia en cuestión.

9. ¿Considera usted que es correcto que un artículo limite la facultad del juez, se debería esclarecer de manera determinante o basta con solo dejar la aplicación del segundo párrafo en facultad discrecional del juez?

No se ve limitada la facultad del juez debido a que a la hora de determinar la pena o ejercer un artículo se analiza la situación y el caso en distintos aspectos que lo crea conveniente.

10. ¿Considera usted que realmente el proceso inmediato está generando resultados positivos y contribuyendo con el sistema de justicia en el Perú?

Si está funcionando, las acciones que se toman se dan al momento por lo cual no se retrasa ni genera carga y libera de manera exitosa la carga procesal y trae consigo puntos positivos, pero la desventaja es la ejecución pero se han logrado avances.



Anexo 12: Entrevista a María Rosa Tapia Castañeda

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistado: María Rosa Tapia Castañeda

Cargo: Especialista Judicial de Juzgado

Institución: Corte Superior de Lima Norte

TÍTULO:

"Responsabilidad Restringida por Edad en la Determinación de la Pena en el Proceso Inmediato en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016"

El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas relacionados al derecho Penal, vinculado a la Responsabilidad Restringida por Edad. Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión.

OBJETIVO GENERAL

Identificar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016

Preguntas:

1. ¿Qué opinión le merece la vigencia del artículo 22 del código penal del Perú frente a la inseguridad ciudadana, siendo un beneficio que se sustenta bajo un supuesto de madurez?

La Sociedad se encuentra expuesta a la delincuencia y es por ello que no concuerdo que se aplique una norma con dicho beneficio sin contar con un medio probatorio para estar seguros que se cuente con el fundamento necesario para hacerlo

2. ¿Considera usted que el sistema de justicia peruano debería apostar por una renovada posición y no ser tan benevolente con el agente activo?

El sistema garantista busca proteger los derechos fundamentales de los imputados. Sin embargo se puede confundir esta medida y podría parecer que se fuese muy benevolente con el agente activo pero no es de esa manera como se aplica. Tenemos aún que considerar que se

busca darle oportunidades para alcanzar a rehabilitarlos, aunque eso parezca no traer grandes resultados, son de igual manera una medida productiva que nuestro sistema sigue adoptando.

3. ¿Qué opinión le merece que en nuestra constitución sostenga y reconozca a un ciudadano a la edad de 18 y según el código penal sostenga otra posición?

En esta situación se vería contradictorio que la carta magna indique algo y una norma de menor rango se contraponga a la misma, no se puede obtener madurez para algunos temas y para otros no.

4. En su opinión, ¿Considera usted que se debería sustentar con un examen psicológico la aplicación de la restricción por edad para demostrar la supuesta falta de discernimiento?

Si se debería sustentar con un medio probatorio y el fiscal ser quien demuestre de esa manera que el imputado se encuentra o no en transición de madurez ya sea esta por medio de un examen psicológico o alguna pericia de esta índole.

OBJETIVO ESPECÍFICO I

Determinar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Qué opinión le merece respecto al delito de hurto agravado sea considerado el tercer más frecuente en lima norte?

Estamos frente a una ola delictiva significativa y en lo que abarca Lima Norte, se tienen con frecuencia, tantos delitos como Hurto Agravado o delitos de robo agravado varios de estos están dentro de la edad establecida por la responsabilidad restringida.

6. ¿En su opinión no es un exceso de beneficios que en el proceso inmediato ya contando la terminación anticipada, además se aplique la responsabilidad restringida por edad?

De acuerdo a mi experiencia puedo decir que no es tan literal como se puede apreciar a primera vista, pero es cierto que se podría tener una idea equivocada. Sin embargo la aplicación de la responsabilidad restringida va de acuerdo al criterio del magistrado y de acuerdo a que delito este beneficio puede resultar excesivo.

7. ¿Considera usted que el proceso inmediato a liberado una cantidad considerable de la carga procesal?

En mi opinión si ha generado cambios positivos y da respaldo al avance que se viene buscando, por lo que considero que su implementación ha sido efectiva respecto a liberar la carga procesal. Además cabe mencionar que quizás tiene ciertos tras pies pero que son corregibles y mejorables para más adelante.

OBJETIVO ESPECÍFICO II

Determinar como la facultad discrecional del juez influye en la aplicación Responsabilidad Restringida por edad con respecto al principio de igualdad en determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte.

8. ¿Cuál es su opinión sobre que el artículo 22 del código penal del Perú excluya a los delitos graves, considera usted que se ve vulnerado el principio de igualdad en la aplicación del artículo en mención?

Partiendo de que el segundo párrafo resulta para algunos engorroso por el principio de igualdad, en mi opinión no existe tal vulneración debido a que se deben cumplir ciertos parámetros para aplicar un control de fuga y en este caso no se cumplen, partiendo porque no hay tal vulneración por lo que la constitución establece que se debe estar en igualdad de condiciones frente a la justicia y no este el caso.

9. ¿Considera usted que es correcto que un artículo limite la facultad del juez, se debería esclarecer de manera determinante o basta con solo dejar la aplicación del segundo párrafo en facultad discrecional del juez?

Primero, no puede existir norma alguna que le diga al juez que deba o no aplicar el juicio que ejerce el juez tiene un análisis de factores que por su evidente conocimiento y trayectoria saben cómo manejarlo de acuerdo al delito que se presente. Segundo, existen normas inconstitucionales en nuestro ordenamiento por lo cual se debería revisarlas y corregirlas o derogadas.

10. ¿Considera usted que realmente el proceso inmediato está generando resultados positivos y contribuyendo con el sistema de justicia en el Perú?

La implementación del proceso inmediato a cumplido con sus expectativas en muchos aspectos tanto positivos como algunos negativos, como toda implementación se va mejorando y acomodando. En mi opinión si considero que el sistema peruano se ha beneficiado con dicho implemento y la sociedad de igual manera.



Anexo 13: Entrevista a Sherly Elizabeth Pinaud Herrera

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistado: SHERLY ELIZABETH PINAUD HERRERA

Cargo: ESPECIALISTA JUDICIAL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL

Institución: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

TÍTULO:

"Responsabilidad Restringida por Edad en la Determinación de la Pena en el Proceso Inmediato en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016"

El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas relacionados al derecho Penal, vinculado a la Responsabilidad Restringida por Edad. Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión.

OBJETIVO GENERAL

Identificar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016

Preguntas:

1. ¿Qué opinión le merece la vigencia del artículo 22 del código penal del Perú frente a la inseguridad ciudadana, siendo un beneficio que se sustenta bajo un supuesto de madurez?

En mi opinión creo incertidumbre debido a que no contiene un sustento firme para su aplicación, debería observarse y de no encontrarse una solución debería derogarse dicho artículo ya que considero que trae consigo un aspecto negativo contundente para el sistema y la sociedad.

2. ¿Considera usted que el sistema de justicia peruano debería apostar por una renovada posición y no ser tan benevolente con el agente activo?

Considero que si observamos nuestro sistema tiene muchas deficiencias entre la teoría y la práctica de la misma, siguiendo por la realidad en la que nos encontramos y con los resultados que hemos visto a lo largo de la historia, si creo conveniente que se debería tomar

un giro prudente en nuestro sistema para ser no solo justos con los agentes activos sino también con la sociedad:.....

3. ¿Qué opinión le merece que en nuestra constitución sostenga y reconozca a un ciudadano a la edad de 18 y según el código penal sostenga otra posición?

Se debe tomar como margen lo establecido en nuestra constitución por ser la carta magna, pero en el ámbito penal se maneja en mi opinión de manera equivocada un concepto distinto para la responsabilidad penal bajo sustentos que se caen solos y que nos han demostrado no traer consigo ninguna mejora, por lo que debería fijarse otra para intentar mejorar y salvaguardar a la sociedad de la inseguridad.

4. En su opinión, ¿Considera usted que se debería sustentar con un examen psicológico la aplicación de la restricción por edad para demostrar la supuesta falta de discernimiento?

Por supuesto, es una medida que ya debería estar exigiendo para que este artículo siga en vigencia, todo artículo debe tener una motivación, fíjame y el artículo 22 carece totalmente de esta.....

OBJETIVO ESPECÍFICO I

Determinar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Qué opinión le merece respecto al delito de hurto agravado sea considerado el tercer más frecuente en lima norte?

Es correcto decir que es uno de los más frecuentes, en mi experiencia he podido ver varios de estos casos los cuales la mitad están dentro de los 17 a 23 años de los cuales algunos ya son reincidentes.

6. ¿En su opinión no es un exceso de beneficios que en el proceso inmediato ya contando la terminación anticipada, además se aplique la responsabilidad restringida por edad?

Si considera que sea un exceso, particularmente... porque para la responsabilidad restringida no hay un sustento firme como ya lo venía mencionando carece de motivación, ya con una reducción por la terminación anticipada es suficiente respondiendo a lo que el sistema busca que es rehabilitarla y darle una oportunidad por el tema de la edad y su futuro pero salvo sea con una pericia psicológica no debería dársele.

7. ¿Considera usted que el proceso inmediato a liberado una cantidad considerable de la carga procesal?

Efectivamente el proceso inmediato ha llegado a nuestro sistema a liberar la carga procesal ya que su principal característica es la celeridad y es muy efectiva. Tanto el sistema se ha visto beneficiado con su implementación y además quienes acuden al sistema para obtener justicia también lo están ya que obtienen respuesta más rápido y se sienten escuchados.

OBJETIVO ESPECÍFICO II

Determinar como la facultad discrecional del juez influye en la aplicación Responsabilidad Restringida por edad con respecto al principio de igualdad en determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte.

8. ¿Cuál es su opinión sobre que el artículo 22 del código penal del Perú excluya a los delitos graves, considera usted que se ve vulnerado el principio de igualdad en la aplicación del artículo en mención?

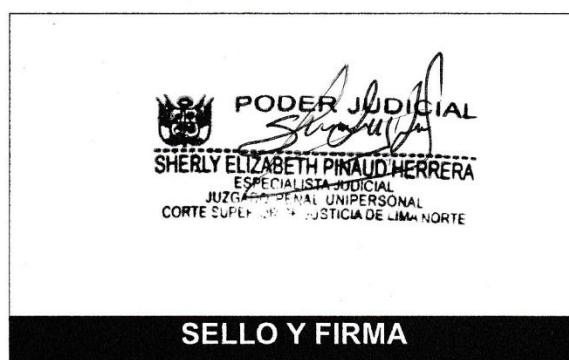
No se vulnera el principio de igualdad ya que estas han incurrido en un delito grave y no pueden ser beneficiados de igual manera como los que han cometido delitos leves, se entiende la diferenciación debido al grado de sus hechos son las consecuencias, es un tema proporcional.

9. ¿Considera usted que es correcto que un artículo limite la facultad del juez, se debería esclarecer de manera determinante o basta con solo dejar la aplicación del segundo párrafo en facultad discrecional del juez?

En nuestro ordenamiento... podemos encontrar todo tipo de normas... tanto inconstitucionales como las que se hace alusión en la pregunta, pero no surten efecto debido a que son advertidas y no se aplican, señalando además que el juez es autónomo y tiene la facultad de determinar la pena teniendo en cuenta una gama amplia de factores y sin afectar ningún derecho de ninguna de las partes.

10. ¿Considera usted que realmente el proceso inmediato está generando resultados positivos y contribuyendo con el sistema de justicia en el Perú?

En mi opinión, dentro de su implementación se han observado algunos conflictos pero como yo antes hice mención, este proceso ha sido implementado para contrarrestar el mal de la carga procesal, por ende considero que con el tiempo se ira acomodando mejor y seguirá trayendo resultados positivos.



Anexo 14: Entrevista a Yda Pacheco Portal

FICHA DE ENTREVISTA

Entrevistado: Yda Paola Pacheco Portal
Cargo: abogada del Area de Promoción
Institución: Municipalidad distrital de Corabaillo.
TÍTULO:

“Responsabilidad Restringida por Edad en la Determinación de la Pena en el Proceso Inmediato en el Distrito Judicial de Lima Norte 2016”

El presente instrumento pretende recopilar su opinión respecto a diferentes temas relacionados al derecho Penal, vinculado a la Responsabilidad Restringida por Edad. Para lo cual, se pide responder las siguientes preguntas con neutralidad y precisión.

OBJETIVO GENERAL

Identificar como afecta la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en el proceso inmediato en el distrito judicial de Lima Norte 2016

Preguntas:

1. ¿Qué opinión le merece la vigencia del artículo 22 del código penal del Perú frente a la inseguridad ciudadana, siendo un beneficio que se sustenta bajo un supuesto de madurez?

En mi opinión, su vigencia viene de años con una realidad ajena a la actual, por lo que ahora su vigencia debería sustentarse de otra manera, porque su sustento pudo ser efectivo en su tiempo pero ya no es así.

2. ¿Considera usted que el sistema de justicia peruano debería apostar por una renovada posición y no ser tan benevolente con el agente activo?

En mi opinión, no creo que se deban agregar más normas o normas más severas, pero si fijamos más en los beneficios que se brindan y si estos son bien aplicados. Un cambio no le haría mal

pero se debe tener suma cuidado a la hora de hacerlo, ya que todo cambio genera un impacto y por ello se debe tomar las medidas correspondientes.

3. ¿Qué opinión le merece que en nuestra constitución sostenga y reconozca a un ciudadano a la edad de 18 y según el código penal sostenga otra posición?

Considero que no es la adecuada, el sistema ya cuenta con una línea a seguir partiendo evidentemente de la Corte Magna y si ahí nos establece algo, de acuerdo a ello, se debería tener en cuenta en materias tanto civil como penal respectivamente, por lo que en mi opinión la posición penal, carece de fundamento.

4. En su opinión, ¿Considera usted que se debería sustentar con un examen psicológico la aplicación de la restricción por edad para demostrar la supuesta falta de discernimiento?

Considero que para darle relevancia a la madurez la cual ya es un tema controversial, que no debe ser sustentado con edad cronológica, si sería lo más adecuado imponer un examen psicológico para demostrar la condición del agente frente a su madurez o discernimiento.

OBJETIVO ESPECÍFICO I

Determinar la importancia de la aplicación de la responsabilidad restringida por edad en la determinación de la pena en casos de hurto agravado en el Proceso Inmediato en el distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Qué opinión le merece respecto al delito de hurto agravado sea considerado el tercer más frecuente en lima norte?

En mi opinión es correcto, considerarlo el tercero en casos que han sido llevados en procesos inmediatos, teniendo en cuenta que no es novedad o noticia nueva de la inseguridad en la que nos encontramos.

6. ¿En su opinión no es un exceso de beneficios que en el proceso inmediato ya contando la terminación anticipada, además se aplique la responsabilidad restringida por edad?

Considero que no podíamos llamar un exceso de beneficios propiamente dicho, sin embargo, si se debe tomar en análisis de si dichos beneficios alcanzan los fines por los que se brindan y lo que vienen generando, para considerar si son positivos o negativos.

7. ¿Considera usted que el proceso inmediato a liberado una cantidad considerable de la carga procesal?

En mi opinión, efectivamente la carga procesal ha sido reducida ponderalmente, pero en ciertos delitos que son los que se ven más en procesos inmediatos, tales como: omisión asistencia familiar, conducción en estado de ebriedad, robo y hurto agravado, suelen ser los más frecuentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO II

Determinar como la facultad discrecional del juez influye en la aplicación Responsabilidad Restringida por edad con respecto al principio de igualdad en determinación de la pena en el distrito judicial Lima Norte.

8. ¿Cuál es su opinión sobre que el artículo 22 del código penal del Perú excluya a los delitos graves, considera usted que se ve vulnerado el principio de igualdad en la aplicación del artículo en mención?

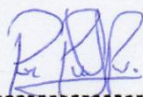
Considero que la gama de delitos expuestos en el segundo párrafo, son sumamente graves, por tanto estoy de acuerdo con que se los excluya, ya que no se vulneraría de ningún derecho, por lo contrario, dársele, me parecería un error.

9. ¿Considera usted que es correcto que un artículo limite la facultad del juez, se debería esclarecer de manera determinante o basta con solo dejar la aplicación del segundo párrafo en facultad discrecional del juez?

Considero evidentemente que no es factible de ninguna manera, que una norma o que alguien limite la facultad del juez, no es permitido y se debe preservar la autonomía del juez, quien bajo sus conocimientos, experiencia y las normas determine la mejor decisión para cada caso.

10. ¿Considera usted que realmente el proceso inmediato está generando resultados positivos y contribuyendo con el sistema de justicia en el Perú?

En mi opinión, el proceso inmediato ha sido determinante, en darle una nueva y mejor cara al sistema de justicia en nuestro país. Dejando en claro que si se están buscando los mejores y poco a poco se van logrando, la implementación de este proceso es una muestra de ello.



Yda Paola Pacheco Portal
ABOGADA
Reg. CAL. 72428

SELLO Y FIRMA